

63ª REUNION — Continuación de la 29ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL)  
SEPTIEMBRE 9 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Palmiro B. Bogliano  
y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González  
Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl  
ACHIARY, Juan C.  
AGUIRRE CÁMARA, José  
ALFONSÍN, Raúl E.  
ALMADA, Jorge Mariano  
AMURA, Luis  
ANTÓN, Luis  
ARANA, Tomás P.  
ARIAS, Luis Osvaldo  
ARRASCAETA, Félix de  
ARROYO, Ramón F.  
ÁVILA, Eduardo Miguel  
BACCAY, Rodolfo D.  
BACHINI, José A.  
BAFFICO, Alejandro O.  
BALBI, Isidro G.  
BALESTRA (h.), Juan  
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.  
BELNICOFF, Manuel  
BERHONGARAY, Pedro J.  
BERINI, Carlos J.  
BERRINI, Emilio  
BILBAO, Saturnino  
BO, Ángel  
BOBILLO, Luis Ignacio  
BOFFI, Luis L.  
BOGLIANO, Palmiro B.  
BRAVO, Carlos A.  
BRAVO, Héctor F.  
BUSACCA, Salvador F.  
CÁCERES, Roberto M.  
CAGGIANO, Ángel R.  
CALABRESE, Pablo  
CALVÓ, Carlos Alberto  
CARDENAS, Juan Carlos  
CARO, José Armando  
CARREIRA, Emilio  
CASAS, David Jorge  
CASTELLAR, Miguel A.  
CAGGIOLA, Luis S.  
COLELLO, Clemente Juan  
CONDOLUCI, Domingo A.  
CONTINI, Juan Carlos  
CORAL, Juan Carlos  
CORTELEZZI, Osvaldo  
COSTANTINO, Adolfo I.  
CHEBLE, Francisco R.  
CHRISTE, Jorge J.  
DAMIANI, Salvador  
DE CARA, José Eduardo

DEL PERO, Miguel P.  
DI LEO, Amadeo  
DOMINGORENA, Horacio O.  
DOMÍNGUEZ, Luis C.  
ELENA, Reinaldo  
FABRIZIO, Luis N.  
FERNÁNDEZ, José M.  
FERNÁNDEZ, Raúl  
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.  
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro  
FERRARI, Luis  
FERREIRA, Jorge W.  
FIOL, Juan Antonio  
FISCHER, Mauricio  
FRAGA, Jorge Horacio  
FREGA, José  
GARAY, Fermín J.  
GARCÍA, Horacio  
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo  
GARIBALDI, Alberto  
GAROFALO, Roberto A.  
GHIOLDI, Américo  
GODOY, Ruperto Honorio  
GÓMEZ MACHADO, Héctor  
GONZÁLEZ BERGÉZ, Pablo  
GRAU, Mario A.  
GUÁLCO, Jorge Nelson  
GUTIÉRREZ, Eduardo O.  
HARRINGTON, Luis J. D.  
HERRERA, Oscar A.  
IGLESIAS, Israel  
JOFRE, Emilio  
LEJARRAGA, Pablo  
LOZANO, Martín  
LUCO, Juan A.  
LLAVER, Santiago Felipe  
LLORENS, Héctor  
MAGGI, José M.  
MAGLIETTI, Alberto R.  
MALDONADO, Carlos A.  
MANSILLA, José R.  
MARSCO, Adalberto O.  
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.  
MÉNDEZ DOYLE, Abel Victor  
MIGANNE, Carlos J.  
MINSK, Hugo E.  
MOLINAS, Ricardo F.  
MONTE, Ricardo Álvaro  
MOR ROIG, Arturo  
MOSSET ITURRASPE, Mario  
MUNIAGURRIA, Camilo  
MUNIZ, Ramón A.  
MURATORI, Eduardo D.

MURMIS, Oscar  
MUSITANI, Héctor Francisco  
OCAMPO, Carlos E.  
OREJA, Pablo Fermín  
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.  
PATLIS, León  
PEDRINI, Ferdinando  
PENA, Roberto M.  
PEREIRA, Antonio  
PÉREZ GALLART, Alcides B.  
PERNASSETTI, Horacio  
PESSINO, Felipe  
PICADO, Estanislao  
PIZARRO, Teodosio F.  
POSSE, Melchor S.  
RASINES, Osvaldo Gregorio  
RENÉ, José María  
RIAL, Oscar  
RITACCO, Araldo A.  
ROBERTO, Mario  
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón  
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José  
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo  
ROIS, Roberto  
ROSITO, M. Oscar  
ROUZAUT, Adolfo R.  
ROZAS, José E.  
RUIZ, José Oscar  
SAGO, Fayiz  
SALADO, Francisco A.  
SANDLER, Héctor R.  
SANTA MARÍA, Oscar Hipólito  
SARRULLE, Oscar E.  
SCARPELLO, Cayetano  
SCHAPIRA, David  
SCHAPOSNIK, Eduardo C.  
SEPÚ GARCÍA, Alberto  
SOLARI, Juan Antonio  
TACHELLA, Eliberto S. J.  
TORREIRO, Raúl  
TOREGLIA, Enrique F.  
TORTONESE, Dante Oscar  
TRÓCCOLI, Antonio A.  
VACA LOBO, Juan Manuel  
VACCAREZZA, Eduardo H.  
VALENTE DE PÉREZ TORT, Lidia  
VÁZQUEZ POL, José  
VEDIA, Enrique de  
VENTEMIGLIA, Rogelio A.  
VILLANUEVA, Julio A.  
VIÑALS, Fernando J.  
ZANONI, Juan Claudio  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

<b>AUSENTE, EN COMISION:</b> <b>LEÓN, Luis Agustín</b>	<b>DÍAZ O'KELLY, Felipe F.</b> <b>FIGUEROA, Jaime Hernán</b> <b>LESCANO, Edmundo A.</b> <b>MARTÍNEZ, Ramón S.</b> <b>MASSOLO, Eduardo A.</b> <b>MERCADO, José Ignacio</b> <b>NOUGUÉS, Isaias J.</b> <b>PALACIOS, Alfredo L.</b> <b>PÉREZ, Raúl</b> <b>REQUENA, Raúl María</b> <b>ROMEU VERDIER, Gabriel</b> <b>PUIZ, Amalio David</b> <b>SCALITER, Juan</b>	<b>SOLANA Jorge D.</b> <b>SOLARI, Eduardo A.</b> <b>TARULLI, Pascual</b>
<b>AUSENTE, CON LICENCIA:</b> <b>CUERDO, Ramón</b>		<b>AUSENTES, SIN AVISO:</b>
<b>AUSENTES, CON AVISO:</b> <b>AVETA, Francisco O.</b> <b>CANTONI, Ángel Serafin</b> <b>CATALÁN, Guillermo</b> <b>CORNEJO LINARES, Juan Carlos</b>		<b>BALBOA, Hernán A.</b> <b>CENTENO, José Isaac</b> <b>DÍAZ, Diógenes C.</b> <b>GALEANO, Roberto A.</b> <b>LILJESTHROM, Eduardo E.</b> <b>MUSACCHIO, Vicente M.</b> <b>PEÑA Y LILLO, Silvestre</b>

## SUMARIO

- 1.—Manifestaciones. (Pág. 3334.)
- 2.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Calabrese. Pasa a comisión. (Pág. 3334.)
- 3.—Legislación represiva. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la materia. (Pág. 3336.)

—En Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre de 1964, a la hora 15 y 45:

## I

## MANIFESTACIONES

**Sr. Fernández Núñez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Tiene la palabra el señor diputado Fernández Núñez.

**Sr. Fernández Núñez.** — Señor presidente, hago indicación de que se siga llamando durante media hora más, a contar de este instante, a los efectos de obtener quórum, pues debemos tener en cuenta que está reunida la Comisión de Labor Parlamentaria.

**Sr. Pizarro.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

**Sr. Pizarro.** — Es para apoyar la indicación de que se siga llamando, pues entiendo que está reunida la Comisión de Legislación Penal con el propósito de aunar criterios para producir un despacho sobre derogación de la legislación represiva.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Con la aclaración de la Presidencia de que hay 109 señores diputados en la casa, si hay asentimiento se continuará llamando durante media hora más, de acuerdo con la indicación del señor diputado Fernández Núñez.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Se continuará llamando.

—Se continúa llamando.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

—A la hora 16 y 25:

## 2

## CUESTION DE PRIVILEGIO

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa la sesión.

**Sr. Calabrese.** — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Calabrese.

**Sr. Calabrese.** — Está visto que en este país el petróleo intranquiliza a los argentinos. Me veo en la obligación de plantear una cuestión de privilegio, que voy a hacer en forma completamente objetiva. No está en mi ánimo provocar una discusión en la Cámara ni tampoco afectar la personalidad del diputado que, en este caso, creo ha violado los fueros de la comisión y del cuerpo.

Voy a citar al chileno Lastarria —ya que tanto citamos a Chile en estos días, gracias a Dios, por el resultado de sus elecciones democráticas—, repitiendo lo que enseña este jurista y político: que las facultades implícitas, inspectivas, de las Cámaras de Diputados son irrenunciables y son sagradas.

Cuando se nombró la Comisión Especial Investigadora sobre Petróleo, la integramos todos en la inteligencia de realizar una investigación esclarecedora. El país necesita claridad, no sólo en este aspecto sino en todos, porque el pueblo va perdiendo paulatinamente la confianza en sus hombres, aunque no en sus instituciones. Los hombres encarnan las instituciones y deben honrarlas con su inteligencia y su conducta.

El diputado que habla, frente a imputaciones que se hicieran al gobierno de la UCRI, al que durante cuatro años apoyamos con nuestra solidaridad y a conciencia, cuando presentó el proyecto de creación de la comisión investigadora, dijo con claridad en sus fundamentos —y lo repito nuevamente— que seríamos nosotros, que fuimos solidarios con una obra de gobierno, los que señalaríamos a la opinión pública quiénes defraudaron los intereses patrimoniales del Estado, si existiera esa defraudación —lo destaco—; pero que también seríamos los primeros en reclamar el restablecimiento de la moral afec-

## 3

## LEGISLACION REPRESIVA

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa la consideración de los despachos contenidos en el orden del día 88, de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, sobre derogación de decretos y decretos leyes que contengan sanciones penales sin validez constitucional (1).

Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Señor presidente: los integrantes de la Comisión de Legislación Penal, con el objeto de producir un despacho que permita el pronunciamiento de la Cámara, hemos convenido en introducir al dictamen de la mayoría unas pequeñas modificaciones. De esta manera dicho despacho contará con la aprobación general de los bloques representados en la Comisión de Legislación Penal.

En consecuencia, el despacho que lleva el número uno, del orden del día 88, sería votado con la eliminación del inciso 1º del artículo 213 bis, que es lo convenido por los integrantes de los bloques.

Para la discusión en particular, por acuerdo de los representantes de los bloques integrantes de la comisión, se introdujeron las siguientes modificaciones: propiciar el artículo 222 del proyecto del Poder Ejecutivo, que se refiere a ultraje de los símbolos, y los aumentos de pena de los artículos 226, 229 y 230 del Código Penal, lo que se consideraría al tratarse en particular el despacho.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia señala que el debate en general está cerrado.

Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

**Sr. Sandler.** — Deseo formular una aclaración.

Este bloque no ha participado en las enmiendas a que ha hecho referencia el señor diputado Bravo, por dos razones: porque sigue suponiendo, como dice su despacho, que en primer término deben introducirse las reformas penales que van a sustituir a la legislación represiva que se deroga y, en segundo término, por no participar del criterio de suprimir el inciso primero del artículo 213 bis. De manera que este bloque va a votar por su propio despacho.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

**Sr. Luco.** — Es para reafirmar lo expuesto por el señor diputado Bravo.

He asistido a la reunión de la Comisión de Legislación Penal y nuestro bloque, al igual que la mayoría de los bloques presentes, ha coincidido en votar en general el dictamen que lleva el número uno.

(1) Véanse los Diarios de Sesiones del 2, 3 y 4 de septiembre de 1964, páginas 3053, 3236 y 3290, respectivamente.

El servirá, a nuestro entender, como la armazón o estructura general de la derogación de la legislación represiva y de las modificaciones que algunos sectores consideran necesario introducir al Código Penal.

Hemos llegado a esta coincidencia cediendo en nuestra posición doctrinaria, que ahora reafirmo, de que son inoportunas las reformas parciales al Código Penal y que nuestro ideal es la reforma integral, más seria y madurada, de dicho código, que por muchas razones no responde a las necesidades actuales desde hace varios años.

No obstante, ante la coincidencia de los sectores y el clamor público de que la legislación represiva de diversos orígenes y épocas políticas sea derogada, es que hemos cedido en cuanto a la inclusión de las reformas al Código Penal, pero insistiendo en que el proyectado inciso primero del artículo 213 bis, sea eliminado del texto del despacho, por cuanto crea una figura jurídica que podríamos llamar asociación ilícita paralela —digo paralela porque la asociación ilícita ya está contemplada en el artículo 210 del Código Penal—, norma que por su vaguedad y amplitud es más peligrosa que conveniente.

Durante la discusión en particular proponemos algunas modificaciones que a nuestro juicio son necesarias, sin perjuicio de la coincidencia a que he hecho referencia, posición que hemos adoptado con todo sentido de la oportunidad histórica y para tratar de simplificar la discusión, contribuyendo a la derogación de la legislación represiva que el pueblo reclamaba desde ya largo tiempo como instrumento de la libertad política.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

**Sr. Bilbao.** — Deseo dejar constancia de que nuestro bloque ha accedido a la eliminación del inciso primero del artículo 213 bis, así como en no insistir respecto del ordenamiento de normas que propiciaba en el despacho que formuló, respetando de esta manera el dictamen de la mayoría. Es necesario aclarar así mismo que ello obedece al compromiso de todos los sectores presentes en la reunión de la comisión, de considerar exhaustivamente todos los problemas vinculados con el despacho que nos ocupa.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado René.

**Sr. René.** — Señor presidente: el bloque de la democracia cristiana ha participado también en la reunión de la comisión, en la que se ha llegado a un acuerdo para producir despacho.

Nuestro criterio era, y sigue siendo, el de que en esta materia habría que emitir dos dictámenes, dos sanciones de la Honorable Cámara: una derogatoria de la legislación represiva, y otra de reforma del Código Penal.

Entendemos que en el ánimo del público no puede quedar la sensación de que, por una vía

más o menos fraudulenta, se pretende reemplazar una legislación represiva por otra.

Por esos motivos, y por otros de técnica legislativa, pensamos que ése era el criterio acertado; pero, evidentemente, la producción de varios despachos hacía peligrar la posibilidad de concretar la derogación de la legislación represiva. Y como esta aspiración es en la emergencia la primera necesidad, deponemos nuestra decisión y nuestra singularidad. Con ese alcance vamos a votar el despacho de mayoría, del cual se retira el inciso 1º del artículo 213 bis, cláusula a la que también nos oponemos.

Reitero que obramos con este criterio para posibilitar la derogación de este tipo de legislación, reservándonos el derecho de promover algunas modificaciones, adiciones o sustituciones al despacho de mayoría, durante la discusión en particular.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

**Sr. Sago.** — Nuestro bloque desea dejar constancia que el acuerdo a que se ha llegado ha sido a los efectos de posibilitar la votación de un despacho de ley, ya que no existía un despacho mayoritario. Se tomó como base el de la mayoría, con exclusión del inciso 1º del artículo 213 bis; pero se determinó que cada grupo o sector podía sostener su posición. Nosotros sostendremos entonces, nuestro criterio de derogar lisa y llanamente las leyes represivas, aceptando únicamente, por el principio de la continuidad jurídica, la necesidad de legislar sobre cheques, dejando para una oportunidad posterior la realización de un estudio orgánico del Código Penal, en lugar de introducir ahora muchas figuras delictivas que quitan organicidad a nuestro código.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — El criterio del bloque socialista argentino fue, desde el primer momento, en el sentido de que son dos cosas distintas la derogación de la legislación llamada represiva y las modificaciones proyectadas al Código Penal. Ese criterio se refleja en el despacho que lleva mi firma, integrado por tres proyectos de ley.

Todos los sectores hemos coincidido en la necesidad de terminar con la legislación represiva. Sin embargo, la multiplicidad de dictámenes nos colocó ante la situación de que esa legislación pudiese quedar vigente al no obtener ninguno de los dictámenes el apoyo necesario. Por esa razón, en las conversaciones celebradas esta tarde nos hemos allanado a la solución arbitrada. Votaremos en general el despacho de la mayoría pero reservándonos, para la discusión en particular, el proponer las enmiendas o agregados que estimemos convenientes.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

**Sr. De Cara.** — Frente a la necesidad de llegar a un acuerdo, los distintos bloques consideraron el despacho de mayoría de la Comisión de Legislación Penal, y el sector demócrata progresista aceptó el temperamento propuesto de votar la derogación de las leyes represivas, suprimiendo de ese dictamen el inciso 1º del artículo 213 bis.

Así mismo, nuestro sector anticipó que propiciaría la modificación del inciso 2º del artículo 213 bis y que votaría en general el despacho de la mayoría, con la salvedad de que ello no implica dejar de lado lo que sostuvimos en la discusión en general acerca de la reforma integral del Código Penal.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — La modificación del despacho ha sido realizada al solo efecto de asegurar que no quedara sin sancionarse la derogación de la legislación represiva. Nosotros nos reservamos el derecho de proponer, en la discusión en particular, algunas modificaciones que consideramos importantes de acuerdo con el temperamento expuesto en el despacho que hemos firmado.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Cheble.

**Sr. Cheble.** — Nuestro bloque no forma parte de ninguna de las dos comisiones que han intervenido en la redacción de los dictámenes, y no obstante no haber sido consultado, como autor del pedido de pase a cuarto intermedio para unificar criterios, a los efectos de lograr la derogación de toda la legislación represiva, y sin aceptar, por supuesto, la reforma al Código Penal, como se ha propuesto, adelanta su voto afirmativo al despacho de la mayoría. Pero deja expresa constancia de que se reserva el derecho de pedir las modificaciones que crea convenientes, cuando se discuta en particular.

**Sr. De Cara.** — Que se vote mecánicamente.

**Sr. Pizarro.** — Yo también solicito que la votación sea mecánica.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar en general, mecánicamente, el despacho número 1 impreso en el orden del día 88, con la supresión del inciso 1º del artículo 213 bis, de acuerdo con lo indicado por el señor miembro informante de la comisión.

— Resulta afirmativa de 99 votos; votan 110 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — En consideración en particular el artículo 1º

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — El artículo 1º del despacho comienza así: «Deróganse los decretos leyes y decretos...», para proseguir con la enumeración de los decretos. En reemplazo de esa redacción, propongo la del artículo 1º de mi dictamen, a saber: «Decláranse nulos y consecuentemente

inexistentes, afectados por vicio de inconstitucionalidad por violación de los artículos 18, 67 inciso 11, y 68 a 73 de la Constitución Nacional, los decretos, decretos leyes y/o decretos con fuerza de ley siguientes:...» y sigue la nómina de las disposiciones.

Los motivos de la enmienda los he dado en dos oportunidades: una, en ocasión de considerar la Cámara los decretos leyes del Poder Ejecutivo, y otra, al tratarse en general el despacho que hoy discutimos.

También solicito que entre los decretos leyes mencionados en el artículo 1º se incluya el número 4.805/63, relacionado con la admisión y expulsión de extranjeros. Los fundamentos en favor de este pedido los he dado en el debate en general, por lo que a él me remito.

Descuento que la Honorable Cámara aceptará estas modificaciones.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por el señor diputado Muñiz?

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión no acepta la modificación que propone el señor diputado Muñiz, por cuanto entiende que en la Constitución Nacional está establecida explícitamente la facultad del Poder Legislativo, cual es la de sancionar o derogar leyes. La declaración de inconstitucionalidad, a criterio de la comisión, corresponde al Poder Judicial; lo mismo podemos decir de la declaración de nulidad. El Poder Legislativo no califica las leyes; simplemente las sanciona o deroga.

En cuanto al decreto 4.805/63, la comisión entiende que no está comprendido en la clase de decretos que procura derogar la Honorable Cámara. Ese decreto se refiere a facultades del Poder Ejecutivo con respecto a los extranjeros que se hayan introducido ilegalmente en el país. No juzga, no valora la entrada o salida del país de los extranjeros. Esas son facultades administrativas que están consideradas en las leyes respectivas. Es decir, que el Poder Ejecutivo a aquel extranjero que, contrariamente a lo que establece la ley correspondiente, haya entrado al país, lo detiene y lo remite a su país de origen.

Por eso, esta comisión entiende que no debe ser incluido entre esta clase de decretos. Por otra parte, las más auténticas democracias del mundo reglamentan en su leyes la entrada y salida del país de los extranjeros y también de los nacionales. El decreto en cuestión no hace más que ajustarse a este criterio general.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

**Sr. Luco.** — Es para formular una pregunta a la comisión.

A mi entender, en la enumeración de los decretos que se derogan por el artículo 1º del despacho que estamos considerando se habría deslizado una omisión, y si así no fuera desearía que la comisión lo aclarara.

El decreto 4.072/56 disolvió y prohibió las actividades del llamado Partido Socialista de la Revolución Nacional. Es, por tanto, un decreto de típico carácter represivo, pero no está incluido entre los decretos que se enumeran en el artículo 1º, que son los que van a derogarse. Quisiera que la comisión explicara si se trata de una omisión o, de lo contrario, dé las razones que ha tenido para que dicho decreto no se incluyera entre los derogados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión ha tenido en cuenta este decreto 4.072/56, que dispuso la disolución del Partido Socialista de la Revolución Nacional. En ocasión de considerárselo, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que juntamente con la de Legislación Penal estudiaron este problema, manifestaron que dicho decreto no aplica ninguna clase de sanciones y que, por lo tanto, no era necesario incluirlo en el artículo 1º, máxime teniendo en cuenta que el Estatuto de los Partidos Políticos, que ya se está por despachar, contemplará situaciones como la del Partido Socialista de la Revolución Nacional y las resolverá con criterio general.

La comisión aclara que la frase del artículo 1º que sigue a la enumeración de decretos y que textualmente dice: «y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales», debe ser eliminada. Al sugerirse esta eliminación se ha tenido en cuenta el criterio enunciado por el doctor Jiménez de Asúa en el seno de la comisión, en el sentido de que la enunciación de los decretos leyes es taxativa, por lo que no corresponde la inclusión de la mencionada frase.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

**Sr. Avila.** — Señor presidente: de acuerdo con lo expuesto en nuestro despacho voy a solicitar que la Honorable Cámara vote en primer término el artículo 1º de nuestro proyecto de ley, es decir, el que incorpora al Código Penal nuevas disposiciones. Considero que este pedido es viable en mérito a una mejor técnica legislativa.

Dejo expresa constancia de que en nuestro despacho se ha deslizado un error material, no imputable a la comisión, sino al que habla, que no pudo controlar el texto definitivo del despacho que entregó a la Comisión de Legislación Penal. Ese error consiste en que no se establece que la disposición que se incorpora es el artículo 213 bis.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar el artículo 1º del despacho de la comisión con la supresión señalada por el señor diputado Bravo.

Se va a informar por Secretaría cómo quedaría redactado el artículo 1º del despacho de la comisión.



**Sr. Secretario (Oliver).** — Del texto original del dictamen, la comisión suprimiría las palabras «y demás decretos leyes y decretos que contengan sanciones penales» a continuación de la enumeración de decretos que hace el artículo o sea a continuación de donde dice «5.541/63».

**Sr. Pizarro.** — Tal es, en efecto, el texto que la comisión acepta.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar el artículo 1º del dictamen con el texto que ha aceptado la comisión.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 100 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar el agregado al artículo 1º, propuesto por el señor diputado Muñiz y no aceptado por la comisión, en el sentido de incluir también el decreto 4.805/63 entre los que deroga el artículo.

— Resulta negativa de 86 votos; votan 102 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — Propongo, señor presidente, que antes del artículo 2º se incorpore al dictamen de la mayoría de la comisión el siguiente...

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Como artículo nuevo, señor diputado?

**Sr. Muñiz.** — Sí, señor presidente. A continuación del artículo 1º, de modo que desplazaría al artículo 2º del dictamen, que pasaría a ser 3º, 4º o el número que corresponda. Su texto es el del artículo 2º del despacho que lleva mi firma, y dice así: «Artículo 2º — Deróganse las leyes 13.234 (dicta normas para organizar la Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas desde tiempo de paz) y 13.985 (represión de los delitos contra la seguridad de la Nación).»

En homenaje a la brevedad y al deseo, que sé común a todos los señores diputados, de terminar esta tarde con la votación del dictamen, no fundamento mi proposición sino que me remito a las razones que di en la discusión en general.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión no acepta, por cuanto la vigencia de las dos leyes mencionadas en el artículo que propone el señor diputado está a consideración de la Comisión de Defensa Nacional, y tengo entendido que la comisión va a producir un despacho que contemplará estos problemas en forma general.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

**Sr. Lejarraga.** — Me decido a pronunciar muy breves palabras, señor presidente, porque hay que convenir en que la respuesta del señor dipu-

tado informante de la Comisión de Legislación Penal frente a la propuesta del señor diputado Muñiz en nombre del socialismo argentino es realmente insuficiente, casi diría pueril. E insisto también porque en la última reunión el señor diputado Caro, no recuerdo si ante una pregunta o espontáneamente, expresó que la comisión no se había pronunciado sobre la derogación de esta ley 13.234 porque en torno a tal derogación existía una iniciativa especial del diputado doctor Palacios. Dicha respuesta fue también insuficiente, como se demuestra por el hecho de que el dictamen que estamos considerando está basado así mismo en distintas iniciativas parlamentarias de derogación de la legislación represiva y de reformas al Código Penal. Y tal iniciativa parlamentaria es la derogación de la ley 13.234 que solicita el señor diputado Muñiz conforme al proyecto del doctor Palacios que lleva la firma de toda la bancada socialista argentina, como las otras contempladas en el despacho que consideramos, entre ellas, por ejemplo, la de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. El hecho de que no figure su derogación en el proyecto del Poder Ejecutivo no tiene tampoco importancia, porque la Cámara no está sometida a la iniciativa del Poder Ejecutivo, ni tiene su limitación en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Quiero llamar la atención sobre la necesidad de derogar la ley 13.234 en esta oportunidad, porque es precisamente ahora, que vamos a derogar la legislación represiva, cuando no podemos olvidar esa ley que el pueblo de la República conoce como una pieza de la represión, con el nombre de plan Conintes. Desde que se sancionó esta ley, en agosto de 1948, son muchas las iniciativas, no solamente del doctor Palacios, sino de diputados de distinta representación política —entre ellas recuerdo la del actual vicepresidente de la República, doctor Perette—, tendientes a la derogación lisa y llana de esta ley.

En el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, que tengo en mi banca, encontramos el antecedente de cómo se sancionó esta ley, y no puedo dejar de recordarlo, como ya lo hizo el doctor Palacios al fundar su proyecto. Se sancionó a libro cerrado, sin despacho de la comisión y sin debate. El presidente Cámpora dijo: «En consideración. Se va a votar en general el despacho producido por la Cámara en Comisión en el proyecto de ley sobre organización militar de la República en tiempo de guerra.» Resultó afirmativa por 81 votos sobre 84 diputados; de manera que hubo tres que no votaron. A continuación, el presidente Cámpora puso en consideración en particular el proyecto, y el señor diputado Alvarez Pereira dijo: «Hago indicación de que se vote a libro cerrado. No hace falta leer los artículos.» Y el presidente expresa que la proposición del señor diputado tiene el sentido de que se suprima la lectura del texto-

de los artículos que tienen los diputados sobre sus pupitres, limitándose la Secretaría a enunciar los números, y solicita el asentimiento de la Cámara para ello. La Cámara asiente por unanimidad.

Luego se procede a votar en la siguiente forma: «Señor Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 19. Se va a votar. Resulta aprobado por unanimidad. Señor Presidente (Cámpora). — En consideración el artículo 29. Se va a votar. Se aprueba por unanimidad.» Y así 38 veces hasta terminar con la aprobación en particular de este proyecto, que pasa a ser la ley 13.234.

Fue tan insólito este trámite y esta sanción, aparte de su gravedad, que el bloque de la Unión Cívica Radical se retiró en pleno. Luego, en un documento que realmente fue severo, enjuició y señaló el despotismo y la inconstitucionalidad de la ley, así sancionada.

No voy a referirme a ella porque ya existe conciencia pública a su respecto, y creo que hay también conciencia en esta Cámara. Es una ley que da a las fuerzas armadas una intervención en el gobierno político del país realmente ilegal e inconstitucional; es una ley que arrasa con derechos y libertades constitucionales; que liquida conceptos e instituciones fundamentales del federalismo; que militariza al país; que ha permitido la aplicación del plan Conintes...

**Sr. Bravo (C. A.).** — Si me permite el señor diputado, debo recordarle que estamos considerando la legislación represiva.

**Sr. Lejarraga.** — Y esta ley pertenece a la legislación represiva, porque en nombre de ella tres gobiernos, el de Perón, el de Aramburu y el de Frondizi, fundados, precisamente en esa ley so pretexto de situaciones de emergencia grave, arrasaron con el derecho de huelga y movilizaron a los trabajadores argentinos que ejercitaban ese derecho. Es la primera legislación represiva que ha tenido el país o, por lo menos, ha sido utilizada con ese objeto.

**Sr. Alfonsín.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Lejarraga.** — Cómo no, señor diputado.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

**Sr. Alfonsín.** — Precisamente, por coincidir con gran parte de los argumentos que el señor diputado acaba de poner de manifiesto, nuestro bloque, y en general nuestro gobierno, está preocupado por hallar la forma de solucionar ese problema. De ahí que la Comisión de Defensa Nacional se haya dedicado al estudio de la modificación de esa ley. Pero se trata de una ley que no tiene simplemente las características de la legislación represiva que consideramos en el artículo 19 del despacho que estamos tratando, sino que hace a un problema de fondo como es, sin duda, el de la defensa nacional. De todas maneras, necesitamos buscar la forma de or-

ganizar y sancionar luego un sistema legal que permita esa defensa.

De modo que no se trata de que discrepemos con los argumentos o las fundamentaciones del señor diputado, sino que precisamente poniendo de manifiesto esa misma preocupación, nuestra bancada y toda la Cámara en general — haría mal en decir que se trata solamente de nuestra bancada — está especialmente interesada en producir la modificación de esa ley.

**Sr. Lejarraga.** — Termino, señor presidente, porque no era mi propósito hablar, y no quiero extenderme. Sobran argumentos para proponer la derogación de esta ley. Creo haber contestado a la interrupción del señor diputado Bravo, sobre el carácter represivo de esta ley. Yo distingo muy bien — ¡cómo no voy a distinguir! — la necesidad de una ley de defensa nacional, como puede ser la que está estudiando la Comisión de Defensa Nacional. Pero ésta es una ley muy distinta, y en respuesta también al señor diputado Bravo quiero recordar que la ley del plan Conintes — que parece el nombre de un general, pero que sólo se trata de una sigla que quiere decir conmoción interna del Estado — que no tiene nada que ver con la defensa nacional, se ha aplicado a problemas y pleitos de la vida política y de la vida social y obrera argentina. Ha permitido que se sustraiga a civiles de sus jueces y jurisdicciones naturales y de la aplicación de las leyes comunes para someterlos, aun sin estar en guerra el país, ni en situación de guerra, o en peligro inminente a las leyes de la justicia militar, por jueces militares, con sacrificio de legítimos derechos individuales, y formales garantías procesales.

Creo que estas razones, que sintética y rápidamente he presentado a consideración de la Cámara, son suficientes para pedir como lo hacemos, la derogación de esta ley 13.234.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

**Sr. Jofré.** — Nuestro bloque se va a oponer a la inclusión que propone la bancada del socialismo argentino. Consideramos que esta ley no es propiamente de las mismas características de las otras de tipo represivo que estimamos deben ser derogadas en esta oportunidad. Es exacto que esa ley llamada plan Conintes ha sido aplicada en varias oportunidades con arbitrariedad, y también que ha sido muy criticada cuando se sancionó. Pero también es exacto que el Estado necesita tener una serie de leyes para poder evitar que grupos armados dentro del país o desde el exterior puedan producir una conmoción en el Estado que se traduzca en inconvenientes fundamentales.

La ley del plan Conintes hace a la defensa nacional y por eso creemos inconveniente que se deje inerte al Estado en esta oportunidad. Confiamos en que pronto hemos de tratar la ley de defensa nacional, que ya están considerando

los miembros de la Comisión de Defensa Nacional.

**Sr. Lejarraga.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Jofré.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

**Sr. Lejarraga.** — El argumento que expone el señor diputado, teóricamente puede ser compartido. Es natural que el país necesita leyes de defensa nacional, pero yo le pregunto entonces, concretamente, al señor diputado: ¿quiere decir que el país antes de agosto de 1948, época en que se dictó esta ley, estaba inerme e indefenso? Otra pregunta: esta ley, que se ha utilizado contra el derecho de huelga y que ha militarizado a los trabajadores que iniciaron huelgas legales, ¿puede interpretarse que es una ley para defender la soberanía nacional?

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

**Sr. Jofré.** — Voy a contestarle al señor diputado. Es indudable que cada tiempo necesita leyes apropiadas. El concepto de defensa nacional en nuestros días ha cambiado fundamentalmente con respecto al de hace veinte o treinta años, y por cierto es indispensable que el Estado moderno tenga hoy las armas jurídicas necesarias a los efectos de una defensa más intensa y efectiva. De manera que entendemos que hoy se necesita una ley de defensa nacional integral a los efectos de que el Estado tenga todos los instrumentos legales para defenderse.

Nos encontramos hoy, por ejemplo, con un fenómeno totalmente distinto de los que se podían producir hace veinte años. En aquel entonces no había guerrilleros como los hay hoy, y esos guerrilleros pueden, en un momento determinado, provocar un estado de conmoción en una provincia argentina o en algún rincón del país, ante lo cual el Estado puede verse impedido de tomar las medidas violentas necesarias a fin de evitar que esos grupos provoquen una conmoción en el lugar donde se produce el levantamiento o, simplemente, ese conato de conmoción. Por eso hoy es necesaria una ley de este tipo, aun cuando yo hago presente que no comparto muchas de las disposiciones del plan Conintes, y con mucho gusto voy a votar su derogación oportunamente, cuando tratemos en forma exhaustiva la nueva ley de defensa nacional.

Por estas razones nosotros vamos a votar en contra de la proposición del sector socialista argentino.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

**Sr. Reñé.** — En el despacho de los diputados demócratas cristianos figura la derogación de la ley 13.234. Creemos que si bien es cierto que el carácter que se pretende dar a ese instru-

mento es el de una ley de defensa nacional, en la realidad de los hechos la misma ha sido siempre usada para la discriminación social y política, y para la persecución.

**Sr. Alfonsín.** — ¿Me permite una interrupción?

**Sr. René.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

**Sr. Alfonsín.** — Quisiera preguntar al señor diputado si desde el 12 de octubre de 1963 tiene conocimiento de que esa ley haya sido utilizada para los fines que menciona.

**Sr. Reñé.** — Si el señor diputado me hubiera dejado seguir exponiendo podría haberle dicho que si esa ley no ha sido usada, es una ley totalmente innecesaria.

**Sr. Alfonsín.** — Lamento sinceramente verme precisado a realizar esta nueva interrupción, pero le quería significar que si todos estamos de acuerdo en que la ley no ha sido utilizada, y al mismo tiempo nos consta que la Comisión de Defensa Nacional está estudiando una modificación integral de la misma, no veo realmente la urgencia para que en este momento, en una forma un poco improvisada, apoyemos una derogación que va a venir de cualquier forma dentro de poco tiempo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Reñé.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Palmiro B. Bogliano.

**Sr. Reñé.** — Se lo voy a explicar, señor diputado.

Si desde el 12 de octubre del año pasado la ley no ha sido usada, y no se prevé que se la vaya a usar próximamente, teniendo en cuenta que hay un proyecto modificatorio que está a estudio de una comisión, no hay ninguna razón para mantenerla.

Lo que puede ocurrir es que el país esté unos días sin el plan Conintes. Entonces, no veo cuál puede ser el problema de derogarla ahora y tratar dentro de unos días el despacho que la comisión habrá de elaborar.

**Sr. Jofré.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Reñé.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

**Sr. Jofré.** — El argumento podría destruirse muy fácilmente. Yo le preguntaría al señor diputado si en estos últimos años hemos utilizado algunos de los aviones de guerra o de los cañones que tenemos en una guerra externa. Evidentemente que no. Entonces, como no los utilizamos, tendríamos que tirarlos al mar.

**Sr. Reñé.** — Creo que es un planteo totalmente distinto, porque en este recinto hemos recogido la información de los señores ministros de que se habían apresado cuarenta guerrilleros. Cua-



renta y dos, me apunta el señor diputado Muñiz. Quiere decir que no hay una posibilidad inmediata de conmoción interna. Por otra parte, entre las normas institucionales está la declaración del estado de sitio, merced a la cual es posible someter a los particulares a la jurisdicción del Poder Ejecutivo.

Para no prolongar el debate, quiero señalar que hay mucha gente en el país que no está enterada de los números de los decretos leyes que vamos a derogar, pero que todos saben qué es el plan Conintes. Cuando mañana los diarios informen que hemos derogado la legislación represiva, pero que queda en pie la ley que lo prevé, creo que habrá algún sentimiento de defraudación, porque para el país sería un alivio incluir en la derogación la ley 13.234.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

**Sr. Schaposnik.** — Vamos a sugerir dos modificaciones respecto del artículo 2º del despacho número uno.

La primera consiste en sustituir las palabras «decláranse vigentes» por «pónense en vigencia». Entiendo que es lo correcto y que la simple declaración no es suficiente. La técnica hubiera aconsejado reproducir las normas que habían sido derogadas por otros decretos, y desde el momento que no fue aceptada la tesis del señor diputado Rouzaut, correspondería volver a enumerar las disposiciones que se ponen en vigencia.

La segunda modificación consiste en incluir entre las normas a derogar a la ley que establece el plan Conintes. Nuestra actitud es coincidente con la posición asumida constantemente por el partido Socialista, por considerar que esa ley es extraña a nuestra legislación.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Voy a responder a las observaciones formuladas por los señores diputados, por su orden.

Al señor diputado Lejarraga debo hacerle presente que la ley 13.234 se refiere exclusivamente a la organización de la Nación para tiempo de guerra.

**Sr. Lejarraga.** — Que se aplica en tiempo de paz.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Comprendemos las preocupaciones de los señores diputados, y, como lo expresara el señor diputado Alfonsín, en gran parte las compartimos. Al formular el pensamiento de la bancada radical no emito juicios valorativos en cuanto a las disposiciones de la ley 13.234, respecto de muchas de las cuales estamos contestes en que deben ser modificadas o derogadas, pero no hay razones de urgencia como para que nos preocupemos de ello en estos momentos, porque el país vive en paz y armonía.

En cuanto a la preocupación de muchos señores diputados de que esa ley pueda aplicarse

contra los movimientos de fuerza de las masas trabajadoras, declaro que este gobierno no lo hará porque no tiene a los trabajadores como enemigos, sino como aliados en las grandes causas de la Nación.

En cuanto a la ley 13.985, nosotros hemos contemplado las situaciones que crea, derogando expresamente aquellos artículos que contienen disposiciones que importan instituir el delito de opinión, como los artículos 8º, 9º, 11, y los incisos a), b) y e) del artículo 12. Estas disposiciones, como ya lo he expresado en el debate en general, sancionan meros delitos de opinión.

Si los señores diputados han comprendido nuestra actitud no podrán decir que no nos mueve la preocupación de asegurar la libertad de expresión en el país.

**Sr. Serú García.** — ¿Me permite, señor diputado, una brevísima interrupción?

**Sr. Bravo (C. A.).** — Sí, señor diputado.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

**Sr. Serú García.** — Solamente es mi deseo poner de manifiesto que si bien es cierto que el gobierno actual desde octubre de 1963 a la fecha no ha aplicado ni ha puesto en ejecución el llamado plan Conintes —lo que, en principio, hablaría acerca de la bondad con que se desenvuelve la gestión gubernativa, por razones de estricta justicia ha de destacarse también que el movimiento de oposición de mayor volumen en la República no ha estado en actitud golpista, y éste es el factor que ha facilitado la circunstancia de que el gobierno no haya tenido necesidad de aplicar el plan Conintes.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Satisface escuchar conceptos como los del señor diputado Serú García que ponen en evidencia la armonía en que se desarrolla la vida política dentro de la República.

**Sr. Schaposnik.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

**Sr. Bravo (C. A.).** — Con mucho gusto.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

**Sr. Schaposnik.** — Con el criterio expuesto por el señor diputado Bravo acerca del buen gobierno que no va a aplicar las leyes represivas, no habría necesidad tampoco de hacer la derogación expresa del resto de esa legislación. Además, el argumento se da vuelta si recordamos que el plan Conintes fue empleado en la totalidad de los casos para perseguir al movimiento obrero y político del país.

Evidentemente, cuando se procede a la movilización de obreros, como por ejemplo la que tuvo lugar en 1960 y 1961, con relación a los petroleros, para evitar una huelga, llegándose a la militarización del personal incluso con la

aplicación de la fajina, se trata de leyes represivas aplicadas al movimiento obrero y político. Vale decir que esa legislación puede ser —y en los hechos lo ha sido— aplicada a sectores obreros y políticos, con fines persecutorios, y por ello nosotros vamos a votar por su derogación. No se trata de una ley de defensa, ya que se aplica en tiempos de paz y típicamente a los sectores de oposición.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Insisto, señores diputados, en que esta ley 13.234 es un instrumento que tiene una finalidad específica y contempla claramente algunos casos. Nosotros no compartimos su espíritu, y como lo he reiterado, afirmamos categóricamente que mientras sea gobierno la Unión Cívica Radical del Pueblo, esa ley no será aplicada para cumplir la finalidad de perseguir a la clase obrera. Además, el tema se halla a estudio de las comisiones de Defensa Nacional y de Asuntos Constitucionales, por lo que creemos que es cuestión de oportunidad.

Recuerdo que en debates anteriores varios señores diputados insistían en que se incluyese en los planes de labor la derogación de las normas represivas, y este bloque, con toda serenidad, pero muy categóricamente, sostuvo que en su oportunidad, cuando se expidiera la comisión respectiva, la legislación de ese tipo iba a ser derogada. Hoy así lo estamos haciendo, y así va a suceder con las leyes 13.234 y 13.985. Cuando se expida la comisión respectiva, serán modificadas o derogadas totalmente, si las circunstancias así lo aconsejan. No nos vamos a negar a dar al país una orientación netamente democrática.

A esta altura concedo la interrupción que me solicita el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — El señor diputado Bravo ha expresado con vocablos subrayados, como para que no pasasen inadvertidos a la Cámara, que la ley no será aplicada. La noticia me alegra enormemente. Pero ¿quién dispone que la ley no será aplicada? ¿El Poder Ejecutivo? No, porque el Poder Ejecutivo, si dispusiera que los jueces no la apliquen se entremetería en una jurisdicción extraña. Mientras la ley exista, los jueces la aplicarán si, a su juicio, se da el caso de un hecho reprimido por ella.

Lo que nosotros queremos con la derogación lisa y llana de la ley es que no haya absolutamente ninguna posibilidad, en ninguna circunstancia y en ningún caso, de que la ley pueda ser aplicada. Pero mientras la ley subsista, puede no faltar un juez que por no estar a tono con los deseos del señor diputado Bravo, que yo comparto en su totalidad, resuelva aplicarla.

Francamente, no sé cómo se puede afirmar con certeza que la ley no será aplicada si se la mantiene en vigor.

Además, esta ley concede facultades extraordinarias, prohibidas expresamente por la Cons-

titución Nacional. Las facultades extraordinarias no se pueden conceder ni aun en la hipótesis de que no tengan efectividad. Entonces, lo único que corresponde es derogar la ley.

Por otra parte, me llama poderosamente la atención que habiendo acuerdo virtualmente unánime acerca de la maldad de la ley y de la necesidad de su derogación, ahora se quiera esperar a que la Comisión de Defensa Nacional produzca despacho. Todos estamos de acuerdo en que ésta no es una ley para la defensa nacional, sino contra el movimiento obrero argentino. Por ello hay que derogarla, sin perjuicio de que en su momento discutamos el instrumento legal que pueda necesitar la Nación para preservarla de la acción de los cuarenta y tres guerrilleros que tanto preocupan al señor diputado Jofré.

**Sr. Presidente (Bogliano).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Le concedo una interrupción al señor diputado Llaver para que responda al señor diputado Muñiz.

**Sr. Llaver.** — Quiero señalar al señor diputado Muñiz que incurre en error, porque cuando el señor diputado Bravo invocó la decisión de este gobierno en el sentido de que la ley no será aplicada, se fundó en el hecho de que la ley, para ser aplicada en tiempo de paz, necesita de una declaración previa del Poder Ejecutivo mediante el dictado de un decreto que establezca la situación de emergencia grave en el país. Recién entonces pueden entrar a jugar sus disposiciones en tiempo de paz. Este es un acto que depende necesariamente de una decisión del Poder Ejecutivo, sin la cual la ley no puede entrar a funcionar en tiempo de paz.

El señor diputado Bravo ha tenido fundamento suficiente para señalar lo que acabo de expresar, fundamento que se afirma más aún en la conducta de este Poder Ejecutivo, que a través del tiempo que lleva en el ejercicio de sus funciones no ha hecho uso de ninguna disposición legal que nosotros, como partido, hemos repudiado; y estamos dispuestos a derogar la ley en la oportunidad que ya se ha señalado.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

**Sr. Llaver.** — Quiero recalcar que pueden ocurrir eventualidades, no durante el tiempo de paz, sino de una conflagración, y esta ley contiene disposiciones de tipo permanente para ser aplicadas en tiempo de guerra, hecho que si bien no está a la vista, no estamos tampoco ante una situación de urgencia que imponga su derogación inmediata frente a las disposiciones que contiene para tiempo de guerra y no para tiempo de paz. Estas son las razones por las que afirmo la posición de nuestro bloque en el sentido de la decisión irrevocable de

provocar la derogación de esta ley, en la oportunidad en que se considere la iniciativa que está a estudio de la Comisión de Defensa Nacional.

**Sr. Presidente** (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

**Sr. Bravo** (C. A.). — En cuanto a la sugerencia del señor diputado Schaposnik, de sustituir la palabra «declárase» por «pónese en vigencia», en el artículo 2º la comisión nada tiene que observar y, en consecuencia, acepta la sugerencia.

**Sr. Presidente** (Mor Roig). — Correspondería votar, previamente, el artículo nuevo propuesto por el señor diputado Muniz.

Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

**Sr. De Cara**. — Para manifestar que el sector demócrata progresista votará por la derogación del llamado plan Conintes, por entender que se trata de una legislación represiva antidemocrática, que sitúa al país, en los tiempos de paz, en estado de guerra, y que pone a los civiles bajo la jurisdicción militar.

**Sr. Presidente** (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

**Sr. Luco**. — El bloque justicialista va a votar afirmativamente la proposición del señor diputado Muñiz, tendiente a derogar la ley 13.234. Al respecto quiero hacer algunas breves consideraciones.

Tenemos la convicción de que la Nación necesita una ley de defensa nacional adaptada a los tiempos actuales. En el curso del debate me he informado de que está madurado el estudio de una ley de esa característica en la Comisión de Defensa Nacional; de manera que no advierto el peligro inminente de que la Nación quede en el desamparo, cuando ya está a punto de producirse el despacho sobre una ley similar con la colaboración de todos los sectores.

Me ha producido alguna duda, sin embargo, escuchar durante la discusión, especialmente de parte de la Federación de Partidos de Centro, una disimulada defensa de la ley denominada plan Conintes, que fue sancionada en la época del gobierno peronista. Esa ley ha sido uno de los argumentos de crítica dura y acerba que permanentemente han esgrimido los opositores al gobierno peronista.

Nosotros vamos a votar afirmativamente su derogación, como una forma de contribuir a la pacificación nacional, porque aunque creemos que pudo tener su justificación porque las circunstancias eran muy diferentes, estimamos que su aplicación produjo más perjuicios que beneficios. Además, vamos a votar por su derogación por considerar que se trata de una típica legislación represiva, que debe desaparecer.

Sin embargo, no dejo de señalar que nos halaga que alguna vez los sectores que nos han combatido duramente reconozcan, aunque sea disimuladamente, que esa ley, entonces y ahora,

significó un factor de salvaguardia de la seguridad nacional.

Pero, repito que el bloque justicialista —aunque se lo pueda calificar de inconsecuente—, en aras de la pacificación nacional, va a votar por la derogación de ésta y de cualquier otra ley represiva.

**Sr. Presidente** (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Del Pero.

**Sr. Del Pero**. — Sin entrar al fondo del asunto —ya que estamos en contra de la derogación postulada— voy a solicitar al señor presidente que, si es posible, se ponga a votación el artículo tal como ha sido propuesto por la comisión, porque cuando en una discusión en particular se propone sustituir un artículo o modificarlo, si el mismo...

**Sr. Muñiz**. — No he propuesto sustituir el artículo, sino que propuse un artículo nuevo.

**Sr. Del Pero**. — Cuando en la discusión en particular se propone sustituir un artículo, o poner uno nuevo, si el mismo no es aceptado por la comisión, debe votarse con preferencia y en primer término el artículo del despacho, descartando el nuevo propuesto; porque por la vía de la proposición de un artículo nuevo, el señor diputado Muñiz viene a incorporar el artículo de su despacho en minoría para que se vote con preferencia al artículo del despacho de la mayoría, cuando corresponde que se vote en la forma expresada. La votación del artículo nuevo con preferencia al despacho mayoritario y con la negativa de la comisión en el recinto, no corresponde. Dar esa preferencia mediando la negativa de la comisión hace inoperante la consulta y eliminaría los despachos en minoría para ser sustituidos con ventajas por una propuesta en el recinto de artículo nuevo.

Debe votarse siempre el despacho de la mayoría, y el artículo nuevo se vota solamente si lo acepta la comisión, de lo contrario no.

**Sr. Presidente** (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

**Sr. Fernández** (R.). — Señor presidente: no veo la urgencia de algunos bloques de esta Cámara en la derogación de la ley 13.234, aspecto en el cual están insistiendo. Por razones de método, entendemos que la modificación de esta ley debe tratarse en la oportunidad en que el Poder Ejecutivo remita al Honorable Congreso la ley de defensa nacional. Nosotros nos comprometemos a reformar esa ley y a adecuarla a las circunstancias y a los reclamos del país cuando se presente la oportunidad.

El radicalismo en más de una ocasión, en plulares documentos, ha repudiado el plan Conintes; pero entiende que no es éste el momento, por razones de método —como decía anteriormente—, para realizar la derogación.

Hemos cumplido hasta este momento con todas nuestras postulaciones. Vamos a cumplir con el país como quizá no se hizo nunca en la historia argentina. Esto mismo que hacemos

ahora al derogar todas las leyes y decretos represivos es una prueba acabada de la seriedad y de la responsabilidad con que está procediendo la Unión Cívica Radical del Pueblo. Tengan la seguridad los demás sectores que estas palabras que pronuncio en nombre de mi partido han de ser cumplidas, pero en su oportunidad.

Se ha conversado en la Comisión de Legislación Penal sobre la forma que debía tener este despacho, y se ha llegado a unificar criterios. Cualquier modificación de la naturaleza de la que se propone vendría a interferir y a postergar en alguna medida esta derogación de normas represivas que todos los argentinos deseamos, y muy particularmente la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Con estas palabras dejo comprometida, una vez más, la obligación que contrae la Unión Cívica Radical del Pueblo de suprimir toda forma de opresión en nuestro país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

**Sr. Bilbao.** — Señor presidente: después de las palabras pronunciadas por el señor diputado Jofré en nombre de nuestro bloque, que en forma clara dio las razones por las cuales votaremos en contra del artículo proyectado por el señor diputado Muñiz en lo referente a la derogación de la llamada «ley Conintes», no cabría agregar otras. Pero ante las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado Luco, con las cuales pretende colocar al sector de la Federación de Partidos de Centro en una aparente contradicción entre su conducta en el pasado y su conducta actual, quiero reiterar lo que ya ha señalado con claridad el señor diputado Llaver, quien ha dicho que la aplicación de esta ley en tiempo de paz necesita un pronunciamiento del Poder Ejecutivo por la vía de un decreto. De manera que lo criticable no es la ley, sino la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda aplicar en tiempo de paz esta ley, que sustancialmente es para tiempo de guerra.

Así, pues, nosotros hemos tenido una posición coherente entonces y ahora. En aquel tiempo criticamos la falta de medida del Poder Ejecutivo de entonces, cuando aplicó en tiempo de paz una ley para épocas de guerra.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo 147 del reglamento, para mejor determinar cómo corresponde realizar la próxima votación de la Cámara.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El artículo se halla ubicado en el capítulo «De la discusión en particular», y dice así: «Artículo 147. — El nuevo artículo o artículos propuestos a la comisión durante la discusión, conforme a lo establecido en el artículo 95 deberán presentarse por escrito; si la comisión no los aceptase votará en primer término su despacho y si éste fuese rechazado, el nuevo artículo o artículos serán con-

siderados en el orden en que hubiesen sido propuestos.»

**Sr. Lejarraga.** — Pido que se lea también el artículo 146 del reglamento.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Por Secretaría se dará lectura del artículo que ha citado el señor diputado Lejarraga.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El artículo 146 dice así: «Durante la discusión en particular de un proyecto podrán presentarse otro u otros artículos que, o sustituyan totalmente al que se está discutiendo, o modifiquen, adicionen o supriman algo de él, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95. Cuando la mayoría de la comisión acepte la sustitución, modificación o supresión, ésta se considerará parte integrante del despacho.»

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Lo que propone el señor diputado Muñiz es una adición al artículo 19, que ya ha sido votado. Se trataría, entonces, de un artículo nuevo.

**Sr. Ocampo.** — Se trata, en efecto, de un artículo nuevo, según ha aclarado expresamente el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — Tiene razón el señor presidente. Se trata de un artículo nuevo, por lo que he pedido que se lo vote a continuación del 19. Corresponde, entonces, aplicar el artículo 146 del reglamento, que dice que dicha proposición debe votarse, y no el artículo 147, que introduce una complicación innecesaria.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia señala que el artículo 29 del dictamen deroga disposiciones de la ley 13.985, cuya derogación total es la que se contempla expresamente en el texto propuesto por el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — He aclarado —no sé si se me ha entendido bien— que propongo la derogación de la ley conocida con el nombre de plan Conintes, y además —después— la derogación de la que lleva el número 13.985. De modo que está claro que primero hay que votar la derogación de la ley 13.234, para recién después votar la derogación de la otra.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Señor diputado Muñiz: de acuerdo con el texto que ha propuesto, se trata de un solo artículo que deroga las dos leyes, y no de dos textos distintos.

**Sr. Muñiz.** — Confieso que soy un mal redactor, pero ahora, con la ayuda de la Presidencia, voy a redactar bien.

Propongo, en consecuencia, un artículo nuevo, que sería el 29, con el siguiente texto: «Derógase la ley 13.234 (dicta normas para organizar la Nación para tiempo de guerra, las que serán adoptadas para tiempo de paz).»

Y otro artículo nuevo más, que llevaría el número 3, redactado así: «Derógase la ley 13.985 (represión de los delitos contra la seguridad de la Nación).»

Agradezco al señor presidente que me haya ayudado a redactar mis dos artículos. (*Risas.*)

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Para obviar to-

da dificultad, y teniendo en cuenta que lo que propone el señor diputado Muñiz es un artículo nuevo, que iría como 2º del dictamen, se va a votar su texto tal como ha sido leído recién por el señor diputado, debiéndose aclarar que no ha sido aceptado por la comisión.

—Resulta negativa de 61 votos; votan 105 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar el artículo 2º del despacho de la mayoría con la modificación propuesta por el señor diputado Schaposnik y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 93 votos; votan 109 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Como se ha aprobado la modificación parcial de la ley 13.985, no corresponde someter a votación el artículo propuesto por el señor diputado Muñiz.

Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

**Sr. Reñé.** — Voy a proponer que, a continuación del artículo 2º, se introduzca un artículo nuevo, cuyo texto sería el del artículo 5º de nuestro dictamen, que dice así: «Substitúyese en el artículo 8º del decreto ley 4.805/63 la expresión final "sin ulterior recurso", por la siguiente: "De dicha resolución podrá apelarse dentro del plazo perentorio de 5 días hábiles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital, la que deberá expedirse en el plazo máximo de diez días hábiles".»

El decreto 4.805 es el que regula la entrada de extranjeros en el país y su permanencia y salida. Entiendo que la comunidad argentina tiene derecho a establecer quiénes son los extranjeros que pueden entrar y afincarse, y, más aún, a establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales deben entrar y aquéllas por las cuales no pueden ser admitidos. Pero este decreto tiene un inconveniente muy serio y es que para la expatriación de los extranjeros ingresados ilegalmente establece solamente un mecanismo de tipo administrativo: una resolución de la Dirección de Migraciones, apelable sólo ante el Ministerio del Interior.

Mediante esta modificación queremos introducir la garantía jurisdiccional, otorgando a quien puede ser excluido del país un recurso de apelación ante la justicia. Entendemos que así se protege a aquellos que pueden ser extrañados por razones políticas, y es por tal razón, entonces, que pedimos a la comisión que acepte este artículo nuevo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión ya se ha pronunciado con respecto a este decreto 4.805, que se refiere a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de detener y remitir a su país de origen u otro país a aquellas personas que no son ni ciudadanos ni habitantes de la República,

es decir, extranjeros que se han introducido ilegalmente en el país, sin contar con las visas que administrativamente corresponden, incluso para los ciudadanos.

Por otra parte, sabemos muy bien que la Constitución Argentina, que es una de las más amplias y libérrimas del mundo, concede los beneficios que ella establece, o sea, declaraciones, derechos y garantías, a todos los habitantes del territorio argentino y a todos los hombres del mundo que quieran habitarlo. Los que han entrado ilegalmente al país es porque no han contado con las garantías constitucionales suficientes, así que no tenemos por qué modificar las leyes existentes para dar facilidades de defensa a quienes no gozan de los beneficios de la Constitución.

Si el señor diputado considera que las leyes de inmigración merecen ser modificadas, que presente el proyecto de ley respectivo y en su momento se pronunciará la Cámara. Pero en esta oportunidad, en que estamos considerando la derogación de delitos de opinión, no tenemos por qué modificar las leyes de inmigración.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Del Pero.

**Sr. Del Pero.** — Voy a insistir en la cuestión reglamentaria, porque por la vía de artículos nuevos se están introduciendo anomalías tratando de votar con preferencia al despacho de la mayoría artículos incluidos en dictámenes de minoría que deben votarse subsidiariamente. Se pretende hacer votar artículos que han sido rechazados por la comisión en el recinto. Reglamentariamente no corresponde que se voten con preferencia al despacho de la comisión. Por eso, pido que se vote en primer término dicho despacho y el artículo nuevo no se vote por falta de aceptación de la comisión.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

**Sr. Sago.** — Nuestro proyecto contempla la modificación del artículo 27 con el agregado del artículo 3º. En realidad, el extranjero que entra irregularmente al país podrá interponer recurso de apelación —dice el decreto— dentro del plazo perentorio de cinco días de notificada la resolución por ante el ministro del Interior, el que, previo el requerimiento de los antecedentes, deberá resolver en el plazo máximo de diez días, sin ulterior recurso. Nosotros sostenemos la necesidad de suprimir las palabras «sin ulterior recurso», vale decir que el extranjero tendría el recurso judicial correspondiente. En tal sentido, nuestro despacho sostiene la supresión de estas palabras en los artículos 8º y 16 del decreto ley 4.805/63.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

**Sr. Bilbao.** — En nuestro despacho se incluye un artículo 13 que dice: «Déjase sin efecto la expresión "sin ulterior recurso" de los artículos



89 y 16 del decreto ley 4.805/63.» Los fundamentos son los que ha dado el señor diputado Reñé. Pensamos que, cuando se trata de una materia como la del extrañamiento de extranjeros, no puede la última palabra ser la del Poder Ejecutivo porque, en definitiva, se trata de juzgar si el extranjero debe o no continuar gozando de los beneficios declarados por la Constitución Nacional.

Pensamos que se trata, en definitiva, de un asunto en el que quien debe tener la última palabra es el Poder Judicial. Por esta razón hemos suprimido la expresión «sin ulterior recurso», autorizando de esta manera y en forma más clara, según lo ha proyectado el señor diputado Reñé, el recurso judicial.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

**Sr. Lejarraga.** — La bancada del socialismo argentino va a apoyar la propuesta del señor diputado Reñé. Confesamos nuestra sorpresa ante la oposición que la mayoría, o la primera minoría, para ser más justo, hace al agregado.

En primer lugar, bien sabemos —eso lo saben todos, no es lección que se va a dictar esta tarde en el Parlamento— que el gobierno argentino, para emplear una expresión más general, el Estado argentino, tiene derecho de regular la entrada, la permanencia y la salida de los extranjeros, vengan de donde o como vinieren a este país. Pero creemos que esa legislación debe dictarla el Congreso de la Nación, por lo delicado del asunto, y no, como en este caso, mediante un decreto de un gobierno defacto, que está en vigencia en virtud de una resolución de tipo general con respecto a todos los decretos leyes del gobierno defacto o, si algunos lo prefieren, del gobierno usurpador del doctor Guido.

Yo le podría decir entonces a la primera minoría: deroguen este decreto del gobierno defacto que legisla en materia tan delicada, y si consideran que es necesario que el país tenga una ley que contemple este problema, proyéctenla y vamos a sancionarla.

Este decreto que gobierna la materia de los extranjeros en el país me recuerda de algún modo —sin ser justamente lo mismo— ciertas medidas de persecución y de odio al extranjero, y más concretamente, una ley infamante —la 4.144—, otra de esas leyes contra las cuales siempre estamos y protestamos, que fue dictada a principios de siglo, en el año 1902, pero que se necesitaron cincuenta y tantos años para que fuera derogada.

Entrando ya en materia, frente a ese argumento fácil de que el Estado, en este caso la policía o el Poder Ejecutivo, tienen derecho a decidir la inmediata expulsión de los extranjeros entrados ilegalmente al país, prefiero invocar y hacer valer la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el famoso caso de Maciá. Eran mis días de estudiante cuando ocurrió el episodio, y recuerdo haber estado mez-

clado en la agitación estudiantil y popular que hizo escuchar su protesta. Maciá, figura eminente de Cataluña, perseguido político, entró al país en forma ilegal, porque el gobierno de aquel entonces se oponía a que ingresara en el país. Maciá estuvo en el puerto, a punto de ser expulsado del país, y el doctor Alfredo Palacios, que lo cobijó en su casa, asumió su defensa, y decidió de la Corte Suprema un pronunciamiento de defensa y de garantía para ese hombre, fundado en que existe un principio en la Constitución al que yo quiero acogerme en este caso, que es justo y generoso.

La Constitución convoca a los hombres y habla de los habitantes de este país, y entonces, cuando un hombre, por cualquier azar de la vida o por cualquier turbulencia de la política o de las luchas sociales pisa tierra argentina, pasa a ser habitante, situación de hecho y de derecho, y a partir de ese momento, debe estar protegido por las leyes de la Nación. Y las leyes de la Nación no pueden consistir en esos decretos de los gobiernos defacto, decretos despoticos, que colocan en manos del Poder Ejecutivo —cuando no del presidente de la República, cuando no de cualquier funcionario— quizás la suerte y la vida —no diré ya la libertad— de ese hombre que ha ingresado ilegalmente en el país. Es necesario entonces que sea la justicia del país una garantía para la situación de esa persona, y no el Poder Ejecutivo quien resuelva en única y última instancia, sin recurso ulterior.

Por eso es importante, elemental y fundamental, la propuesta del señor diputado Reñé. No sé con qué espíritu ni en nombre de qué principio nos podemos oponer a la posibilidad de que ese hombre, que va a ser extrañado del territorio argentino, pueda recurrir a los jueces de este país para que dicten en última instancia su decisión.

Con un sentido de profunda convicción y de emoción humana me permito llamar la atención de la primera minoría de que se cometería un error reñido con las mejores tradiciones argentinas y con un elevado criterio jurídico, si se niega a dar un recurso legal, ante la justicia del país, a todo hombre, cualquiera sea él, que haya pisado el suelo argentino.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Reñé, para una segunda intervención. A tal efecto, dispone de sólo cinco minutos.

**Sr. Reñé.** — No habría sido necesaria una nueva intervención mía si el señor diputado Bravo me hubiese concedido la interrupción que le pedí.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Lo lamento, pero no oí al señor diputado.

**Sr. Reñé.** — La argumentación del señor diputado Bravo, desestimando en nombre de la comisión la iniciativa que propongo...

**Sr. Bravo (C. A.).** — En nombre de los diputados de mi bloque que firmamos el despacho.

**Sr. Reñé.** — ...ha girado alrededor de que las normas de que se trata son aplicables a los extranjeros que han entrado ilegalmente al país. Es cierto, y comparto el razonamiento en ese aspecto, pero el señor diputado Bravo deja en blanco un aspecto fundamental: el de quién determina que han entrado ilegalmente al país. En esto estriba todo mi empeño.

No quiero que sean las autoridades administrativas las que determinen que la entrada al país es ilegal, sino la justicia, porque con el mismo criterio podríamos decir que el Código Penal se aplica a los delincuentes y dejar su aplicación en manos de la policía, para que ella determine quiénes son criminales.

En lo que respecta al hecho de que si yo tengo inquietudes debo presentar un proyecto para modificar las leyes de inmigración, le contesto al señor diputado que en este caso estaría siguiendo la técnica fijada por el Poder Ejecutivo. No voy a cometer la descortesía de responderle que si el Poder Ejecutivo tenía inquietudes por la reforma de la legislación penal en lo que atañe al régimen del cheque, debía haber mandado un proyecto especial, y no incluirlo en el proyecto sobre derogación de la legislación represiva.

Creo que estamos actuando con criterio amplio, y que con ese criterio hemos accedido, aun fuera de la buena técnica parlamentaria, a iniciativas remitidas por el Poder Ejecutivo, que no hacen al fondo de la cuestión, como es el caso de la incorporación, un poco colateralmente, de estas reformas al Código Penal.

De cualquier forma, se puede aceptar una sugerencia respecto del decreto en cuestión, que figura como punto sexto en el anexo al orden del día 88, que contiene el dictamen de la Comisión de Legislación Penal, de la que forma parte el señor diputado Bravo, pues expresamente dice: «Admisión, permanencia y expulsión de extranjeros. Decreto ley 4.805/63.» De modo que si el señor diputado tenía algo que cuestionar con respecto al carácter de represiva de esta disposición, pudo hacerlo al imprimirse el trabajo anexo al despacho.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

**Sr. Bobillo.** — Quiero señalar que la proposición del señor diputado Reñé no se ajusta a una buena técnica legislativa. Si bien esta ley incursiona en diversas figuras penales, esas normas son típicamente de ese carácter; pero en el caso del agregado que se propone se trata de una norma de tipo administrativo que reglamenta la entrada, permanencia y salida de los extranjeros.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

**Sr. Bobillo.** — Por lo tanto, no es conducente a una buena técnica legislativa el que incur-

sionemos, a propósito de un proyecto de tipo penal, en materias que escapan estrictamente de esa órbita. De lo contrario caeríamos en leyes tan criticadas como las llamadas leyes ómnibus, como aquella que establecía el bien de familia e incursionaba en la disolubilidad del vínculo matrimonial y en el régimen de la minoridad, u otra serie de actividades e instituciones, lo que no se ajusta a lo que debe ser una buena labor legislativa.

Por otro lado, quiero señalar que en el artículo que se propone, o por lo menos en el que figura en el suplemento del orden del día 88, se establece el recurso para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; vale decir, que se acuerda a la Corte competencia originaria en un asunto que no corresponde, violándose así el artículo 101 de la Constitución Nacional.

**Sr. Reñé.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Bobillo.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Reñé.** — En el suplemento al orden del día la disposición figura de esa manera; pero si el señor diputado hubiera atendido a mi exposición el otro día...

**Sr. Bobillo.** — Atendí, señor diputado.

**Sr. Reñé.** — Tal vez, entonces, se le ha escapado; pero cuando hice la fundamentación de nuestro despacho en general destaqué que se había deslizado un error y que propondría una modificación, otorgando el recurso para ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital. Evidentemente se había deslizado un error de transcripción que colocaba al artículo propuesto en la situación de inconstitucionalidad.

**Sr. Bobillo.** — Hago notar al señor diputado Reñé que también hay un error en el nuevo texto que propone, ya que da recurso para ante la Cámara Federal de la Capital, como si los extranjeros sólo entrasen por este lugar y no pudiesen hacerlo por otras zonas del país.

**Sr. Reñé.** — Le acepto, entonces, señor diputado, que el recurso pueda interponerse ante todas las cámaras del país, si bien advierto que cuando un extranjero sea detenido con relación a un trámite que deba hacer ante el Ministerio del Interior será traído a la Capital, ya que los trámites de inmigración tienen que realizarse en ese ministerio. Pero reitero que acepto la procedencia del recurso ante cualquier cámara del país.

**Sr. Bobillo.** — Es una cuestión procesal.

**Sr. Sago.** — Derogando la parte del decreto que expresa: «sin ulterior recurso», queda solucionado el problema. El decreto es represivo, porque impide el derecho a un recurso ulterior, y nada más que por eso.

**Sr. Bobillo.** — Lo que ahora está en discusión no es la bondad del recurso judicial frente a una resolución administrativa; lo que está en juego es la oportunidad de modificar un decreto ley

que reglamenta aspectos de la inmigración, cuando estamos tratando asuntos que se refieren a normas penales. En este sentido señalo que no es congruente, ni de buena técnica legislativa, modificar un aspecto de la reglamentación de la inmigración a través del proyecto que considera la Honorable Cámara.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — En nombre de la comisión adelanto que vamos a mantener el despacho. Al mismo tiempo deseo hacer una aclaración cordial al señor diputado Lejarraga, quien tanta emoción puso en defensa de la situación de muchos hombres de lucha enamorados de la libertad que aspiran llegar al suelo argentino para ampararse también en esa libertad. Comparto íntegramente sus palabras y declaro formalmente esta adhesión, pero advierto que hay una diferencia que impide comparar el decreto ley 4.805 con la ley de residencia. La ley de residencia se aplicaba a los extranjeros residentes en el territorio argentino, en tanto que el decreto ley 4.805 es para los extranjeros no residentes en la República. En consecuencia, mantenemos el criterio anteriormente fijado.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Corresponde votar el despacho de la comisión.

**Sr. Pizarro.** — Lo que se va a votar es un artículo nuevo.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — En primer lugar se va a votar el artículo tal como ha sido despachado por la comisión.

**Sr. Pizarro.** — Que se lea por Secretaría.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Por Secretaría se informará.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El despacho de la comisión es el artículo 3º que figura impreso en el orden del día número 88, y lo que propone el señor diputado Reñé es el artículo 5º, sobre observaciones que hizo con el señor diputado Vedia y que figura en el suplemento del orden del día 88. El artículo que propone el señor diputado Reñé sería uno nuevo e iría con anterioridad al 3º de la comisión.

**Sr. Gómez Machado.** — ¿Cuál es el artículo de la comisión?

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Por Secretaría se va a leer el despacho de la mayoría de la comisión.

**Sr. Sago.** — La mayoría no legisló sobre ese aspecto.

**Sr. Bilbao.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

**Sr. Bilbao.** — Creo necesaria una aclaración con respecto al artículo 3º del despacho de la mayoría.

No existe discrepancia en esta Cámara —por que incluso todos los sectores hemos anunciado que estamos de acuerdo— respecto de la eliminación del inciso 1º del artículo 213 bis. Lo que

aquí se trata es de introducir otra nueva norma derogativa o modificativa de toda esta legislación represiva y que no hace a la modificación del código penal sustantivo.

Nuestra legislación penal no es solamente la legislación penal sustantiva, sino también la legislación penal procesal. Y por esa razón aquí se crea un recurso contra las resoluciones del poder administrador cuando se trata de extranjería de extranjeros.

Además nuestro despacho incluye un artículo 14 que tiende a eliminar del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Penal de la Capital la expresión «o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63». Y estas cuestiones conviene dilucidarlas en este momento, porque si no vamos a tener que hacer declaraciones derogativas a posteriori de las reformas al Código Penal que hagamos ahora.

Esta es una cuestión de método, y en cierto modo forma parte del compromiso que hemos contraído en la Comisión de Legislación Penal de no hacer problemas sobre ordenamiento de normas; de tratar primero todo lo que se refiera a derogaciones y luego introducir las normas positivas modificatorias del Código Penal.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Por Secretaría se va a leer la modificación propuesta por el señor diputado Reñé.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El señor diputado Reñé propone, a continuación del artículo 2º ya votado, el siguiente, que corresponde al 5º contenido en el suplemento al orden del día 88, con observaciones que hizo juntamente con el señor diputado Vedia.

El artículo nuevo que propone el señor diputado Reñé, llevaría el número 3º y dice así: «Sustitúyese en el artículo 8º del decreto ley 4.805/63, la expresión final "sin ulterior recurso", por la siguiente: "De dicha resolución podrá apelarse dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la Capital —el señor diputado ha sustituido sobre el impreso las palabras 'la Corte Suprema de Justicia de la Nación'—, la que deberá expedirse en el plazo máximo de diez días hábiles".» ¿Sostiene el señor diputado la última parte de este artículo, que no la ha leído?

**Sr. Reñé.** — Sí, señor secretario.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — La Presidencia, para no modificar el criterio reglamentario del titular de la Cámara, someterá a votación el artículo nuevo propuesto por el señor diputado Reñé.

**Sr. Pizarro.** — Es acertado el criterio de la Presidencia.

**Sr. Presidente (Del Pero).** — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado Reñé, que iría como 3º.

—Resulta negativa de 61 votos; votan 107 señores diputados.

**Sr. Presidente** (Del Pero). — Corresponde votar el artículo 3º del despacho.

Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

**Sr. Reñé.** — Quiero proponer un nuevo artículo, que iría a continuación del último sancionado, y que diría lo siguiente: «Concédesse amnistía amplia y general para todos los procesados o condenados por delitos encuadrados en las disposiciones derogadas por los artículos 1º y 2º de la presente ley, excepto para los procesados o condenados por delitos comunes.»

Cuando se hicieron algunas consideraciones por parte del señor diputado Muñiz, acerca de la necesidad o conveniencia de que la Cámara declarara inconstitucionales los decretos leyes, me mantuve en silencio. Entiendo que ése es uno de los temas que está en discusión.

Por vocación me gustaría también la declaración de inconstitucionalidad, y confieso que si nuestro despacho no prevé ese aspecto fue por una simple razón de prudencia de política jurídica, porque temimos que pueda ocurrir que algún juez considere que no es facultad del Congreso declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Por consiguiente, entonces, optamos por la fórmula de la derogación, facultad que inquestionablemente corresponde al Poder Legislativo.

Pero entiendo que la medida que dictamos debe ser complementada con una amnistía que alcance a todos los delitos políticos y sociales. Con ella no solamente se aplicará la ley más benigna, sino que inclusive quienes hayan sido sancionados quedarán liberados de todo antecedente para el caso de una posible reincidencia.

Creo que si estamos en tren de proceder a una derogación amplia y generosa, que busque el reencuentro de todos los argentinos, que elimine las causas de fricción de tipo político y social, esa amnistía será un digno complemento que concurrirá a dar al pueblo la sensación de que efectivamente este Poder Legislativo quiere contribuir a pacificar el país, olvidando de todas formas esos presuntos delitos políticos y sociales.

**Sr. Presidente** (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

**Sr. Muñiz.** — Para formular una pregunta aclaratoria al miembro informante del despacho de la mayoría antes de pasar a considerar el artículo 3º que se vincula con las modificaciones al Código Penal; vale decir, sin salir del terreno de la derogación de la legislación represiva que estamos considerando.

Le hago la pregunta al señor diputado porque advierto que se ha incurrido en una omisión importante, que es la siguiente.

En el año 1960 se sancionó la ley 15.293, conocida con el nombre de represión de las actividades terroristas. Esa ley fue dictada para un término de dos o tres años, no recuerdo exactamente, por lo que a la fecha ha caducado, pero un artículo de la misma ley —me parece

que el 27— establece que los procesos continúan a pesar de haber perimido la ley, así como también que los condenados continúan presos. Yo tengo noticias de que hay procesados y presos.

Considero, entonces, que esa omisión evidente —porque no encuentro ninguna disposición en el sentido que me preocupa en el despacho de la mayoría— hay que subsanarla con el artículo 3º de mi despacho, que dice: «En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 2º del Código Penal.»

Razones legales, humanas e inspiradas en el propósito de terminar con este mal pasado argentino aconsejan una solución como la que propicio, si es que realmente existe, repito, la omisión que señalo.

**Sr. Presidente** (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

**Sr. Sago.** — Había solicitado la palabra para referirme a otro asunto, pero ya que el señor diputado Muñiz ha formulado apreciaciones respecto a la ley 15.293, deseo decir que el despacho que nosotros suscribimos, en su artículo 5º también establece que «a los hechos juzgados y pendientes de decisión judicial que estén comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicable el artículo 2º del Código Penal», porque la ley efectivamente establece para las penas un efecto ultraactivo.

**Sr. Presidente** (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo. (C. A.).** — La comisión ya había contemplado el caso planteado por el señor diputado Muñiz respecto de la ley 15.293, que era una ley temporaria, con vigencia hasta el mes de enero de 1961, que por el artículo 27 establecía la ultraactividad respecto a sus sanciones.

Esto ha sido contemplado por el artículo 15 del despacho formulado por la Federación de Partidos de Centro, que establece que en esos casos a los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que están comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicado el artículo 2º del Código Penal, es decir la ley más benigna.

**Sr. Muñiz.** — No es el despacho que tomamos como base.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Pero es lo que va a ser votado en su oportunidad por este bloque.

En cuanto a las sugerencias formuladas por el señor diputado Reñé, nuestro bloque ya ha fijado su posición. No corresponde establecer la amnistía si van a ser derogadas todas las normas que sancionan los delitos de opinión. Hay jurisprudencia de los tribunales del país en el sentido de que derogada una ley todos los que están comprendidos en sus disposiciones o han sido sancionados por ella, recuperan inmediatamente su libertad. El artículo 15, que

se refiere a la ley 15.293, va a resolver también este problema.

Con respecto a la amnistía voy a señalar que es opinión del diputado que habla que ella no borra el delito; lo único que borra es la pena.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

**Sr. Reñé.** — Solamente quiero aclarar que la amnistía no es el indulto. La amnistía tiene una raíz etimológica que habla del olvido, y, por consiguiente, borra todos los antecedentes. De manera que no es un mero indulto, en el que simplemente se devuelve la libertad.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Por Secretaría se va a dar lectura del nuevo artículo propuesto por el señor diputado Reñé.

**Sr. Secretario (Oliver).** — Dice así: «Concédese amnistía amplia y general para todos los procesados o condenados por delitos encuadrados en las disposiciones derogadas por los artículos 19 y 20 de la presente ley, excepto para los procesados o condenados por delitos comunes.»

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

**Sr. Fernández (R.).** — Insisto en lo que dijo hace un momento el señor diputado Del Pero. El artículo que se propone es un artículo nuevo, y debe ser votado al final. Primero hay que votar el despacho de la comisión, si es que la comisión no acepta las modificaciones. Los artículos 146 y 147 del reglamento así lo indican.

Para una mayor ilustración pido que se lean los artículos 146 y 147 del reglamento.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Ya han sido leídos, pero la Presidencia no tiene inconveniente en que por Secretaría se lean nuevamente.

La interpretación que ha hecho la Presidencia es que cuando se trata de un artículo nuevo que se propone a continuación de uno ya sancionado, corresponde votarlo. De cualquier manera, la Honorable Cámara decidirá.

Por Secretaría se va a dar lectura de los artículos 146 y 147 del reglamento.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El artículo 146 dice así: «Durante la discusión en particular de un proyecto podrán presentarse otro u otros artículos que, o sustituyan totalmente al que se está discutiendo, o modifiquen, adicionen o supriman algo de él, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95. Cuando la mayoría de la comisión acepte la sustitución, modificación o supresión, ésta se considerará parte integrante del despacho.»

Y el artículo 147 dice: «El nuevo artículo o artículos propuestos a la comisión durante la discusión, conforme a lo establecido en el artículo 95, deberán presentarse por escrito; si la

comisión no los aceptase, se votará en primer término su despacho, y si éste fuese rechazado, el nuevo artículo o artículos serán considerados en el orden en que hubiesen sido propuestos.»

**Sr. García.** — El artículo 147, que se acaba de leer, hace referencia expresa a los artículos nuevos que se proponen durante la discusión en particular, que es cabalmente el caso presente.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia entiende que su interpretación del reglamento se halla avalada por el buen sentido, sin perjuicio de allanarse a lo que decida la Honorable Cámara; porque si se trata de un artículo nuevo, que debe intercalarse entre otros artículos, la buena técnica legislativa indica que no podría votarse al final.

Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

**Sr. Reñé.** — El artículo 147 del reglamento establece que si la comisión no aceptase el artículo o artículos nuevos, se votará en primer término su despacho. Pero ocurre que en esta materia no hay despacho de comisión. ¿En qué lugar el dictamen habla de la posibilidad de una amnistía?

Creo que de esa manera entraríamos en un callejón sin salida, por cuanto no existiendo despacho de comisión, no podría votarse una iniciativa, o debería votarse al final, donde, metodológicamente, quizá no debiera ubicarse.

En consecuencia, entiendo que el criterio de la Presidencia se halla ajustado al buen sentido: si se propone un artículo nuevo, que viene a llenar una laguna del dictamen, no existiendo despacho de comisión debe votarse de inmediato el artículo propuesto.

Si no aceptamos este criterio, vamos a entrar en un problema interpretativo que, si se resuelve de otra manera, puede permitir a la mayoría frustrar toda tentativa de las minorías para introducir mejoras en los proyectos.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — De conformidad con el artículo 205 del reglamento, la Cámara decidirá por una votación si la interpretación que hace la Presidencia del reglamento es correcta.

Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Yo deseo preguntar qué es lo que va a interpretar la Cámara. Aquí no hay alternativa. La interpretación de la Presidencia es la correcta, y la Cámara nada tiene que resolver en este asunto. Porque yo pregunto: si la Cámara resolviese que hay que votar el despacho de la comisión, ¿qué despacho pondría a votación el señor presidente, si no hay tal en esta materia?

Aquí hay un solo camino: votar el artículo, aprobándolo o desechándolo, porque se trata de un artículo nuevo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Esa es la interpretación de la Presidencia, señor diputado, pero se ha hecho otra. Por lo tanto, es de apli-



cación —así lo considera la Presidencia —el artículo 205 del reglamento, del que se dará lectura por Secretaría.

**Sr. Secretario (Oliver).** — Dice así: «Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente.»

**Sr. Alfonsín.** — Nuestro bloque, a los efectos de posibilitar la marcha de la sesión, va a allanarse a la interpretación de la Presidencia de la Cámara.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar el artículo 3º nuevo propuesto por el señor diputado Reñé, que se va a leer por Secretaría.

**Sr. Secretario (Oliver).** — «Concédese amnistía amplia y general para todos los procesados o condenados por delitos encuadrados en las disposiciones derogadas por los artículos 1º y 2º de la presente ley, excepto para los procesados o condenados por delitos comunes.»

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar.

— Resulta negativa de 78 votos; votan 106 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Por Secretaría se va a dar lectura del artículo nuevo propuesto por el señor diputado Muñiz.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El señor diputado Muñiz propone como artículo nuevo el que figura como 3º del primer proyecto de su despacho, que dice: «En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 2º del Código Penal.»

**Sr. Bravo (C. A.).** — Ese artículo vamos a votarlo oportunamente, por razones de método.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿El señor diputado Muñiz acepta la propuesta del señor diputado Bravo?

**Sr. Muñiz.** — El señor diputado Bravo, en ocasión de su anterior interrupción, manifestó que este artículo será votado como parte integrante de la ley. Ante esa promesa, no puedo sino aceptarla. Lo importante es que se vote.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — En consideración el artículo 3º del despacho de la comisión. Tiene la palabra el señor diputado Sago.

**Sr. Sago.** — Voy a fijar la posición de mi bloque, a efectos de no hablar en todos los artículos y facilitar el desenvolvimiento más acelerado del debate.

En la discusión en general anticipamos que se iban a crear veinte, treinta o cuarenta figuras delictivas nuevas, según los despachos, cuando toda la discusión se iba a desarrollar en el terreno político. Y así fue, señor presidente.

No es cierto que la Unión Cívica Radical del Pueblo cumpla con su programa al decir que deroga la legislación represiva. Denuncio con toda seriedad que, junto con las leyes represivas que se derogan, se dictan otras extraídas, pre-

cisamente, de los decretos represivos que queremos derogar. No se deroga nada, porque todos sabemos, y muchos lo han establecido, como el señor diputado Rouzaut, a través de su despacho, que estos decretos no tienen fuerza de ley porque son inconstitucionales. Pero sí van a tener fuerza de ley porque serán incluidas en el código en nuevas figuras delictivas.

Estoy de acuerdo en que hay una gran diferencia con el proyecto primitivo que envió el Poder Ejecutivo, que establecía penas de uno a cinco años para una nueva figura delictiva, como la agrupación ilícita, paralela, como se dijo aquí, a la del artículo 210 del Código Penal.

También estoy de acuerdo en que hoy se ha dado otro paso positivo al derogar el inciso 1º del artículo 213 bis, que propuso la mayoría. Pero quiero decir que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Era preferible que rigieran todos estos decretos leyes represivos, dando derecho al ciudadano argentino acusado de plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial, y no como ahora, en que queda sin ese recurso. Hay muchas figuras peligrosas. El inciso 2º del artículo 213 coincide con el artículo 36 del decreto 788 que derogamos, con la benevolencia de aquel decreto, que agregaba que el que instigare públicamente de «modo peligroso para la tranquilidad», cosa que no se dice aquí...

**Sr. Alfonsín.** — ¿Qué inciso es, señor diputado?

**Sr. Sago.** — El inciso 2º del artículo 213 bis.

**Sr. Alfonsín.** — ¿A qué se refiere?

**Sr. Sago.** — Dice lo siguiente: «El que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales.»

Quiero hacer una salvedad. No nos oponemos en forma alguna a dictar leyes de este tipo; pero entendemos que hay que buscar la tipicidad necesaria, encuadrando el delito en la norma que se quiere castigar, a fin de no posibilitar que a través de una figura enunciada así, con el beneplácito de toda la opinión pública, puedan ser castigados injustamente otros sectores a quienes no corresponde la adecuación de la norma que nosotros realmente queremos aplicar. Se va a producir una distorsión en la valorización de los delitos y de las penas, porque son muchos los nuevos delitos y las nuevas figuras.

Ya en oportunidad de considerarse el despacho en general planteamos la necesidad de discutir el código como corresponde. Obran en la Comisión de Legislación Penal antecedentes fundamentales del proyecto de 1960, y tenemos, no la opinión política nuestra, que podría ser parcial o despreciada por considerarse que busca un dividendo político, sino la opinión clara de hombres como Jiménez de Asúa y Soler, que no pueden ser discutidos en cuanto a su capacidad en materia penal, quienes hablan de la

magnífica aptitud de nuestro código para defender todos los bienes y los derechos que se intenta proteger en este instante. No hay ningún hecho que obligue a crear nuevas figuras delictivas. Lo acaba de decir el señor diputado Fernández, presidente del bloque mayoritario, y el señor diputado Bravo, miembro informante del mismo bloque, al expresar que la más perfecta paz y armonía reinan en la República.

El actual Código Penal tiene la posibilidad de proteger el orden público. Dice al respecto Soler: «El Código Penal argentino es un instrumento civilizado; es mucho mejor que el Código Penal alemán, y que todos los sudamericanos. Es uno de los mejores códigos del mundo, mejor, inclusive, que el español. Es aun superior al italiano. De manera que entrar a hacer enmiendas precipitadas al Código Penal es una falta de respeto.»

Concretamente, cuando se le preguntó al doctor Soler si él creía que el interés jurídico general del país quedaba protegido con el actual código, manifestó que sí, y agregó: «Me apena un poco, lo confieso, la superficialidad con que ha sido tocado el Código Penal. Yo he tratado artículo por artículo con mucha paciencia y mucho respeto, porque este código, lejos de ser una cosa mala, es una cosa muy bien hecha; y lo digo yo, que he hecho un proyecto para sustituirlo. El código vigente proviene de la mejor opinión científica europea y occidental. Es hijo del Código Penal italiano del 90, este código de Italia, obra de las escuelas toscana y napolitana, que representan la síntesis del derecho penal histórico de dos mil años. De manera que entrar en este código con tanta falta de respeto es técnicamente deplorable.» Jiménez de Asúa también expresó que defiende el código actual.

Confiar en la ley penal es fácil y sencillo, pero hay que tener cuidado al hacer eso. Si nosotros queremos luchar contra los grupos patoteros y contra tataras especialmente, además de la norma penal, debemos establecer un poder de vigilancia, el poder de policía. Más que estableciendo una pena elevada para hechos como éstos, se va conseguir que no haya patotas en las calles de la República a través de un Estado vigilante y de un poder policial adecuado a la circunstancia actual y a la actual población. Días pasados, el señor ministro del Interior informó en esta Cámara que actualmente existen tantos agentes policiales como en 1923, pese al mayor número de habitantes. Es esencial que busquemos una solución para los delitos que nos afectan y nos atemorizan; hoy es el problema de los guerrilleros, ayer era el de Florencio Varela; otras veces es el robo de automóviles.

Atendamos al aspecto social de todos estos problemas; consideremos la disconformidad de nuestro pueblo en esta materia, y demos todo tipo de soluciones para buscar luego un Código Penal que sea realmente efectivo en su aplicación y no sea distorsionado en las normas que contiene.

Durante varias horas se discutió si correspondía dar posibilidad en la democracia argentina a un partido totalitario o si correspondía proscribirlo. Ese no es aspecto que deba contemplar el Código Penal, sino el Estatuto de los Partidos Políticos, porque se trata de un derecho que atañe a la constitución misma de los partidos que, en definitiva, son los que intervienen en la integración y formación de los poderes del Estado. Cuando se discuta el Estatuto de los Partidos Políticos tendremos oportunidad de volver sobre estos aspectos relacionados con el comunismo o con cualquier partido totalitario; pero de ninguna manera la proscripción puede concretarse a través de una norma del Código Penal.

A través de la excarcelación, la modificación llega, incluso, a los códigos de procedimientos. La excarcelación es un arbitrio o un criterio que usa el juez en atención a la calidad del delincuente. Declarar que algunos delitos no son excarcelables, sin atender a la calidad del acusado, es un injusticia. Son normas establecidas desde hace mucho tiempo, que tienen vigencia y jurisprudencia, por lo cual no es posible admitir que a través de un artículo oculto dentro de una reforma del Código Penal se modifique el alcance de lo que significa la excarcelación o la condena condicional.

Nosotros nos vamos a oponer a que por vía de la derogación de las leyes represivas se introduzcan nuevos delitos, excepción hecha de las normas referidas al cheque, que a efectos de mantener la continuidad jurídica necesaria, vamos a sostener las normas que establece el proyecto de Código de Soler o las del proyecto del Poder Ejecutivo, luego que las discutamos.

Señor presidente: quiero que no sean ilusorias las garantías de los derechos individuales de los argentinos. Recordemos que el Código Penal es el límite estricto a la facultad de reprimir; sin avasallar ni extender nuestra facultad de legislador más que a lo que las normas penales que estamos discutiendo estrictamente lo exigen.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — No creo que sea momento de reabrir el debate en general, sino de puntualizar algunas discrepancias parciales.

En efecto, por vía de esta ley de derogación de normas proscriptivas no podemos hacer una modificación sustancial y a fondo del Código Penal, pero quien admite una excepción puede admitir la segunda. Todos los sectores políticos de la Cámara coinciden en admitir la excepción en lo que respecta a reprimir el libramiento de cheques sin fondo, y yo creo que no puede ni debe escapar a la sensibilidad de la Cámara la incriminación inmediata de los delitos discriminatorios.

Los representantes de nuestro sector en la comisión han propuesto para este artículo la

siguiente redacción: «Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que en forma individual o colectiva instigaren, participaren o realizaren actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual o discriminatorio a las personas o entidades fundado en motivos raciales, religiosos, políticos o sociales.»

A la vez, aprovecho esta discusión en particular para solicitar a la Honorable Cámara el agregado, a partir del último punto del dictamen de nuestros representantes en las comisiones, de los siguientes agravantes que estaban incluidos en un proyecto que nuestro bloque presentará el día 30 de julio último: «Las penas se duplicarán en los siguientes casos: a) Cuando los actos delictivos sean realizados por integrantes de una asociación creada con motivos de instigación discriminatoria; b) Cuando los actos delictivos sean realizados por funcionario público; en este caso se impondrá como accesoria la pena de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas; c) Cuando se instigare, participare o realizaren atentados contra las personas, entidades o sus propiedades fundados en motivos raciales, religiosos, políticos o sociales.»

Entendemos que con este agregado daremos una muestra de la sensibilidad que debe caracterizar a la Honorable Cámara, aprovechando así la ocasión para definir un delito nuevo que no está contemplado en nuestro Código Penal y que no podemos continuar ignorando en nuestra República. Creo que debemos legislar con un criterio más amplio que el establecido en el dictamen de mayoría, que limita la incriminación del delito de tratamiento desigual al fundado en motivos religiosos o raciales.

La intención del dictamen de la mayoría es plausible; pero en nuestro país, lamentablemente, la discriminación no se realiza exclusivamente por motivos religiosos o raciales, y los atentados, que constituirían el grado máximo de la conducta discriminatoria, se llevan a cabo también por motivos políticos o sociales.

Nuestro sector entiende que debe incriminarse en forma definitiva este tipo de delitos; que debe hacérselo con la latitud que las necesidades del momento exigen, y que, además, debe aprovecharse esta circunstancia de utilizar una excepción en el tratamiento de esta ley modificatoria del Código Penal, para no olvidarnos que esta segunda es tanto o más importante que la primera, porque hace a la convivencia de nuestra sociedad y a todo aquello a que nos hemos referido en toda esta jornada legislativa de azaroso trámite.

Este es el momento de poner punto final a ese peligro nacional y no dejarlo subordinado a un proceso que como mínimo nos conducirá hasta mediados del año que viene.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

**Sr. Schaposnik.** — Voy a proponer una modificación, que puede tener prácticamente el mismo sentido que la formulada por el señor diputado Patlis, pero que estimo puede simplificar un poco la posibilidad de su aceptación por la comisión.

En síntesis, propongo que se modifique la primera parte del artículo 213 bis en la siguiente forma: «El que públicamente, en forma oral, escrita o gráfica provocare, predicare o suscitare desprecio u odio a otra persona o personas, o agrupamientos, colectividades, o instituciones, por razones de raza, nacionalidad, color o religión. Si el delito se cometiere por organizaciones o personas jurídicas o respondiere a concierto entre varias personas, la responsabilidad penal recaerá sobre cada uno de los dirigentes o coautores, y tal circunstancia deberá reputarse como agravante a efectos de la graduación de la pena.»

La modificación que propongo y que enunciara en la discusión en general del proyecto ha tenido origen en la Cámara de Diputados del Uruguay. Ella compendia el pensamiento encaminado a reprimir a las entidades que se formen con el fin de suscitar el odio entre razas o religiones. Propongo concretamente la redacción que acabo de leer, sin insistir en mayores abundamientos, porque en la discusión en general de las razones determinantes de esta propuesta, que anuncié iba a formular en el momento de la discusión en particular. Y pediría especialmente a la comisión que aceptara la modificación que propongo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta la comisión el artículo sustituto y la modificación, propuestos por los señores diputados Patlis y Schaposnik, respectivamente?

**Sr. Bravo (C. A.).** — En lo que respecta a las expresiones del señor diputado Fayiz Sago, para mantener el buen orden del debate y debido a que el señor diputado ha incursionado profundamente en el terreno político, el miembro informante de la comisión va a responder.

En cuanto a las observaciones que se formulan al artículo y a las correcciones que se proponen para el inciso 2º del artículo 213 bis, la comisión va a aceptar las modificaciones propuestas por el señor diputado Schaposnik, por entender que, no obstante su sencillez, son más claras, y también porque es su criterio no votar disposiciones que en alguna manera puedan interpretarse como tendientes a coartar la libertad política.

Con el mismo criterio con que en comisión se rechazó la expresión «lucha de clases», vamos a rechazar ahora la sugerencia del señor diputado Patlis.

Para el buen orden de la votación, voy a sugerir a la Presidencia que el artículo 3º se vote por partes. En oportunidad de votarse el inciso 2º del artículo 213 bis, que pasa a ser 1º, que se agreguen a continuación las agravantes que el

señor diputado Schaposnik proponga, ya que la comisión las va a aceptar.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

**Sr. Schaposnik.** — Habría que introducir una modificación de forma a la primera parte, que contribuiría a aclarar más el objetivo del artículo.

Voy a pedir a la comisión, ya que estoy dando redacción definitiva a las modificaciones que propongo, que se acepten en conjunto las reformas que engloban los dos aspectos a que se refiere el señor diputado Bravo.

Si así lo desea el señor diputado, puedo dar lectura nuevamente de las modificaciones que propongo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Si el señor diputado Schaposnik fuera tan amable, la Presidencia le agradecería que diera lectura íntegra de las modificaciones que propone.

**Sr. Schaposnik.** — Con mucho gusto, señor presidente.

Propongo el siguiente texto: «El que públicamente, en forma oral, escrita o gráfica provocare, predicare o suscitare desprecio u odio a otra persona o personas, o agrupamientos, colectividades o instituciones, por razones de raza, nacionalidad, color o religión. Si el delito se cometiere por organizaciones o personas jurídicas o respondiere a concierto entre varias personas, la responsabilidad penal recaerá sobre cada uno de los dirigentes o coautores y tal circunstancia deberá reputarse como agravante a efectos de la graduación de la pena.»

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión reitera su posición: acepta la segunda parte de la modificación propuesta por el señor diputado Schaposnik, es decir, en lo que hace a las agravantes.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

**Sr. Caro.** — He pedido la palabra para fijar la posición de nuestro bloque respecto al problema que se discute en este momento.

La posición personal del diputado que habla, en el seno de la comisión, ha sido allí expuesta y también lo hizo en oportunidad de debatirse en general este problema de la reforma al código, a que se encuentra abocada la Cámara.

Desde luego, sin que personalmente resigne los puntos de vista expuestos oportunamente, doy la opinión de mi bloque, que se asienta también en otra consideración: en la necesidad imperiosa de que se derogue, con una sanción rápida, todo tipo de legislación represiva. Por eso nuestro bloque ha entendido que debía hacer algunas concesiones a los principios teóricos que sustentaba primeramente. Por eso nuestro bloque está dispuesto a alguna forma de sanción de este inciso segundo, y digo alguna forma porque la que actualmente ha aceptado la comisión no le satisface por las siguientes razones.

Si bien es públicamente conocida la posición de nuestro movimiento, mantenida no solamente en esta dura emergencia en que nos encontramos, constituyendo una fuerza de oposición, sino también cuando estábamos en el gobierno, en el sentido de repudiar todo tipo de discriminación racial o religiosa por razones que hacen a la esencia de nuestra doctrina —a cuyo respecto nos encontramos perfectamente cómodos—, somos consecuentes con nuestros pensamiento y con nuestra acción, desde el gobierno o desde la oposición.

Aprovecho esta circunstancia para ratificar la postura de nuestro movimiento, contrario a todo tipo de discriminación, repudiando los hechos que se han cometido recientemente en el país; pero entiendo que con ser éste un problema latente y actual, no es el más grave a que se ve abocado el país en estos días, porque si repudiable es discriminar en razón del origen o de la idea religiosa, también lo es cuando esa discriminación se funda en motivo meramente político. Y ese es el problema real que aflige actualmente al país, ese tipo de discriminación en que se encuentran embarcados algunos sectores minoritarios de la reacción argentina.

A diario estamos viendo manifestaciones de ese tipo, producidas por minúsculas agrupaciones que pregonan a los cuatro vientos su sed de venganza y exterminio; dicen desembozadamente que el partido político al que pertenecemos debe ser proscrito definitivamente de la vida política, que le deben ser negados todos los derechos, inclusive el de pensar.

También es sabido que en la mente de los inspiradores y de los jefes de las frustradas intentonas revolucionarias del pasado reciente, había la idea de la eliminación masiva de los más calificados dirigentes peronistas del país. Para nadie es secreto que circulaban listas de nombres de personas cuya eliminación violenta se propugnaba, alcanzando a más de dos mil dirigentes peronistas y de la Unión Cívica Radical Intransigente.

Este aspecto también tiene que preverlo la ley, y nosotros, al rechazar todo tipo de discriminación racial o religiosa, vamos a propugnar que se modifique el despacho en el sentido de incriminar todo tipo de discriminación política que tienda a la segregación y desunión de la familia argentina.

Por estas consideraciones, propongo concretamente a la comisión que acepte la redacción del inciso 2º en los términos que lo hizo el señor diputado De Caro.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

**Sr. Gutiérrez.** — Comprendo el motivo que ha llevado a producir dictamen en este inciso 2º, pero creo que la forma típica está mal lograda.

Dice «el que públicamente instigare», y yo me pongo en la hipótesis de que la instigación se dé y de que tenga éxito. Y aquí le formulo

una pregunta a la comisión: ¿quién será el que aplique un tratamiento desigual a las personas, fundado en motivos religiosos o raciales? No me explico, y en esto encuentro un contrasentido en el mismo inciso, porque no se incrimina precisamente al que lo aplica. Se incrimina al instigador y no al que aplica un tratamiento desigual. En consecuencia, la norma penal está malograda. Por eso consulto a la comisión.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Señor presidente: nosotros hemos firmado un despacho de comisión en el que, por razones de tipo doctrinario y fundamentalmente de técnica legislativa, no aceptamos las modificaciones que se introducen al Código Penal. No obstante esto, advertidos de que la tesis de la Cámara se inclina por la modificación de artículos del Código Penal, vamos a intervenir en la discusión y vamos a acompañar con nuestro voto la modificación propuesta por el señor diputado Patlis, que es a la que ha aludido el señor diputado Caro cuando se refirió a la redactada por el diputado De Cara.

—Un concurrente a las galerías arroja volantes y profiere expresiones.

**Sr. Muniagurria.** — Que se lo haga retirar.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Ya se han tomado medidas.

**Sr. Elena.** — Es una agresión al Parlamento argentino. Es una falta de respeto a esta Cámara.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se han tomado las providencias del caso.

Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — Sería conveniente que se leyera la propuesta del señor diputado Schaposnik para ver si tiene coincidencia con la que he formulado.

**Sr. Schaposnik.** — Modificando en parte mi proposición, a los efectos de que pueda contar con la adhesión de los otros bloques, yo le daría esta redacción definitiva: «El que públicamente, en forma oral, escrita o gráfica, instigare, participar, predicare o suscitare desprecio, odio o tratamiento desigual a otra persona o personas, agrupamientos, colectividades o instituciones por razones de raza, nacionalidad, color o religión». La segunda parte, que ha sido aceptada, sería la siguiente: «Si el delito se cometiere por organizaciones o personas jurídicas...», etcétera.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Cuál es el criterio de la comisión?

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión solicita que se vote el artículo 3º por partes.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Desde luego, señor diputado.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Cuando llegue el momento de votarse el inciso 2º, la comisión señalará el texto cuya votación aconseja.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a dar lectura del artículo 213 bis, que figura en el artículo 3º del despacho.

**Sr. Secretario (Oliver).** — El artículo 3º del despacho dice así: «Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público» y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo: Artículo 213 bis. Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años: 1, el que públicamente instigare o participare en actos tendientes a que se aplique un tratamiento desigual a las personas fundado en motivos religiosos o raciales». Este inciso llevaba el número 2, pero por haberse suprimido el número 1, pasa a ser 1.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

**Sr. Fernández (R).** — Pediría que se leyera el texto definitivo que propone el señor diputado Schaposnik, porque tengo entendido que ha rectificado el texto primitivo.

**Sr. Schaposnik.** — He introducido alguna modificación al texto primitivo con el ánimo de contemplar las observaciones que me han sido formuladas por otros señores diputados.

Ya he dicho en qué consistían las modificaciones. Para ahorrar tiempo, las voy a leer: «El que públicamente, en forma oral, escrita o gráfica, instigare, participar, predicare o suscitare desprecio, odio o tratamiento desigual a otra persona o personas, o agrupamientos, colectividades o instituciones, por razones de raza, nacionalidad, color o religión...»

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

**Sr. Martínez Raymonda.** — Luego de escuchar la nueva redacción, advierto en ella una incongruencia. De conformidad con el texto leído por el señor diputado Schaposnik, se sanciona al que instigare a realizar determinados actos, pero no se sanciona al que los realizare, observación que es más o menos similar a la que había hecho el señor diputado Gutiérrez al texto anterior.

En segundo término, falta la apreciación referida a los problemas políticos, que —insisto— es fundamental incluir, porque no solamente puede existir discriminación por motivos raciales, de nacionalidad, color o religión, sino también en razón de las ideologías políticas.

En consecuencia, solicitaría al señor diputado Schaposnik y a la comisión que consideren estas dos sugerencias.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio, a fin de aunar criterios para una mejor elaboración del artículo que se considera.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 19 y 15.



—A las 20 y 10:

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa la sesión.

Por Secretaría se dará lectura al inciso 1º del artículo 3º que propone la comisión.

**Sr. Secretario (Oliver).** — Quedaría redactado en los siguientes términos: «el que ejecutare o públicamente instigare actos que signifiquen lesión, agravio o tratamiento discriminatorio a personas o instituciones por motivos de índole racial o religiosa. Si el delito se cometiere por organizaciones o respondiere a concierto entre varias personas, la responsabilidad penal recaerá en cada uno de los dirigentes o coautores. Tal circunstancia deberá reputarse como agravante a efectos de la graduación de la pena. Cuando el delito fuere cometido por funcionarios públicos, llevará como accesorio la pena de inhabilitación por el mismo tiempo de la condena».

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — Propongo a la comisión que la inhabilitación sea tal cual figura en el proyecto de ley a que hice referencia: absoluta y perpetua para ejercer funciones públicas.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Bravo (C. A.).** — No, señor presidente.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

**Sr. Bilbao.** — En general, este sector estaría de acuerdo con la proposición del señor diputado Bravo, pero pediría que se suprimieran los términos «tratamiento discriminatorio», porque ése es un concepto demasiado lato.

Incorre en discriminación cualquier enfrentamiento de opiniones sobre cualquier tema. Y ese enfrentamiento, cuando se produce en materia religiosa es lo corriente, por estar ligado a la fe que la intransigencia sea la regla. Además, asimilar la simple discriminación al acto o a la instigación que provoca lesión o agravios nos parece que no es correcto. La lesión o el agravio por razones religiosas o raciales debe ser incriminada, pero la simple discriminación nos parece que no. Ello podría dar lugar, incluso, en la aplicación de la norma, a graves abusos, que podrían, en suma, conspirar contra una de las garantías constitucionales como es, precisamente, la libertad de opinión.

Cuando en esta materia se pretende hacer extensiva la norma a casos que no están determinados concretamente por la ley penal, se incurre en una norma peligrosa que, lejos de combatir un acto que todos estamos de acuerdo en que hay que reprimir, va a extenderlo a situaciones que nosotros mismos queremos respetar, como es la libertad de opinión, que en una democracia debe ser un enfrentamiento permanente.

Además, el término «discriminatorio» tiene un sentido político, pero cuando nosotros va-

mos a introducirlo en una norma penal tenemos que darle la significación correcta y lingüística que tiene. Por ello, yo pediría que se suprimiera en el texto que se ha leído la expresión «o tratamiento discriminatorio».

Por otra parte, cuando se refiere a las entidades, se habla de dirigentes. ¿Qué son dirigentes? Creo que bastaría con poner «aquellos que desempeñan funciones directivas o representativas de las entidades». De lo contrario, no se expresa fielmente lo que se quiere decir.

Por lo expuesto pediría a la comisión que reflexionara sobre estas cuestiones que planteo, con el único propósito de contribuir a establecer una norma que realmente cumple la finalidad que a todos nos inspira.

**Sr. Muñiz.** — ¿Cuántos diputados hay en la casa, señor presidente?

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Ochenta y nueve señores diputados.

**Sr. Muñiz.** — Pido que se pase lista.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Todavía no se va a votar, señor diputado. Está abierto el debate en torno a la modificación propuesta por la comisión.

**Sr. Muñiz.** — Entendí que se iba a llamar para votar.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Sí, pero posteriormente solicitaron la palabra varios señores diputados.

**Sr. Muñiz.** — Entonces, postergo mi proposición para cuando se deba votar.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

**Sr. Gutiérrez.** — Coincido en mucho, señor presidente, con las expresiones vertidas en el recinto por el señor diputado Bilbao. Sería necesario, por lo menos, suprimir del texto del artículo que se proyecta las palabras «o tratamiento discriminatorio».

Creo que todos los diputados estamos de acuerdo en incriminar la discriminación cuando ella tiende o está enderezada a perturbar o alterar la paz social, así como a crear un enfrentamiento o lucha de clases entre seres de distintas razas o credos. Pero de ninguna manera el mero tratamiento puede ser incriminado por la norma penal, y mucho menos cuando el mero trato discriminatorio puede darse insito en la profesión de los credos.

Si no se eliminan esas palabras, será necesario calificar el trato discriminatorio, para reprimirlo cuando tienda a perturbar o alterar la paz social, o crear un estado de conmoción pública.

En las tribunas políticas se suele hablar de la discriminación racial, pero debemos tener mucho cuidado de trasladar el verbo político a la norma jurídica, que tiene consecuencias y que, por lo tanto, debe ser muy detenidamente estudiada, porque ésta es la única manera de dictar una ley seria.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — ¿Acepta la comisión las indicaciones de los señores diputados Bilbao y Gutiérrez?

**Sr. Bravo (C. A.).** — La comisión mantiene el despacho de que se ha dado lectura por Secretaría, pero impónese aclarar que cuando se habla de tratamiento discriminatorio no se comprende, por cierto, a las expresiones que se utilicen en los templos en el cumplimiento del apostolado de los cultos. El tratamiento discriminatorio que se incrimina podría decirse que es el que tiene una relación íntima con la violencia, con la lucha, con la alteración del orden público y se utilizan las ideas religiosas, pero de ninguna manera en lo que respecta a las simples manifestaciones de fe. He querido formular estas aclaraciones para que no haya errores interpretativos.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

**Sr. González Bergez.** — Por las palabras del señor diputado Bravo —que no he alcanzado a oír muy bien— parece que la comisión entendería que al incriminar los actos discriminatorios quedarían sólo excluidas las expresiones verbales de discriminación. Pero hay actos que son propios de todas las religiones —y hablo con toda tranquilidad porque no tengo ninguna preocupación religiosa— como, por ejemplo, el determinar que es indispensable pertenecer o practicar determinada religión para incorporarse a ciertos institutos. Tal es el caso de los colegios religiosos —católicos, protestantes o judíos— que exigen que los alumnos estén bautizados o confiesen una determinada religión para poder inscribirse en ellos. Ahí estamos en presencia de una discriminación, porque se distingue una situación de otras, y no se trata simplemente de una expresión verbal, sino de hechos concretos.

Pregunto a la comisión si el caso que he expuesto entraría dentro de lo previsto por el texto que se nos somete a consideración.

**Sr. Ghioldi.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. González Bergez.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Ghioldi.** — Me parece que es oportuna la aclaración que formula el señor diputado González Bergez, porque la idea de discriminación que se ha difundido y ha sido fijada en la Carta de los Derechos del Hombre se refiere fundamentalmente a actos legales de los poderes públicos. Son los Estados y los gobiernos que por acto de ley no deben ni pueden hacer discriminación, pero de ninguna manera está comprendido, dentro del concepto de la discriminación, que un instituto privado de enseñanza, sin subvención estatal, por ejemplo, se vea obligado a aceptar la inscripción de cualquiera que desee estudiar en sus aulas.

Me parece que la cuestión es clara: la discriminación es fundamentalmente un concepto legal aplicable a los poderes.

**Sr. Villanueva.** — No está dicho en ese sentido en el despacho.

**Sr. Ghioldi.** — Eso es lo que advierto.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado González Bergez.

**Sr. González Bergez.** — Precisamente, las expresiones del señor diputado Ghioldi no hacen sino confirmar lo que yo venía diciendo, porque en el despacho se usa la palabra «discriminación» con otro sentido, no en el de la discriminación por vía de la ley, que sólo puede hacer el Congreso, sino por la vía de actos de particulares, que son los que estarían comprendidos en el Código Penal.

Digo que tampoco este tipo de discriminaciones o distingos está bien que se incriminen, porque en la Constitucional Nacional hay discriminaciones por razones religiosas, como que el presidente de la República tiene que pertenecer a una determinada fe religiosa.

Otra pregunta que quería hacer a la comisión se refiere al significado de la expresión «dirigentes». Algunos de los actos o de las instigaciones que se trata de incriminar pueden ser realizados por instituciones o por partidos políticos. ¿Y qué significa «dirigentes»? ¿Los que desempeñan determinadas funciones de acuerdo con el estatuto orgánico de la institución o partido a que pertenecen?

Más de una vez nos encontramos con que son dirigentes de los partidos políticos quienes no tienen ninguna función otorgada por los propios estatutos, y en cambio hallamos que, de acuerdo con esos mismos estatutos, hay ciudadanos que desempeñan tareas directivas pero que no son responsables de todos los actos o de todas las orientaciones de ese partido o de esa institución.

En un partido organizado existe, por ejemplo, un comité central, que es el que dirige la política, y comités locales o de barrio, cuyos integrantes son dirigentes de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto orgánico, pero carecen de responsabilidad sobre la mayoría de los actos del partido.

Quiero decir en concreto que al legislar en materia penal hay que cuidar mucho el léxico y no emplear expresiones que puedan dar lugar a equívocos o a ambivalencias en la interpretación. De cualquier manera, dejo formuladas las preguntas al señor miembro informante de la comisión.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

**Sr. Schaposnik.** — El señor diputado Bilbao había propuesto utilizar las palabras «tratamiento desigual», y otro señor diputado entendió que debía emplearse la expresión «tratamiento discriminatorio». Nosotros entendimos que había identidad en los términos propuestos, y en última instancia podríamos volver a re-

considerar si se interpreta que «tratamiento desigual» es distinto a «tratamiento discriminatorio».

En cuanto al otro problema que surgió con relación a los dirigentes, también consideramos la palabra a emplear y entendimos por dirigentes a los que ocupan los cargos directivos, desde el momento que si se sancionara a todos los miembros de una sociedad se podría inculpar aun a aquellos que pueden no ser responsables de los actos cometidos por los directivos.

La palabra «dirigentes» está utilizada en el sentido de directivos de las entidades.

**Sr. González Bergez.** — En el caso de quien tuviese un cargo directivo y sin embargo discrepara con la orientación de los directivos de la entidad, ¿tendría responsabilidad también?

**Sr. Schaposnik.** — No, porque en ese caso, si hubiera manifestado su oposición a un acto de ese tipo, estaría exento de la pena.

**Sr. González Bergez.** — Habría que especificarlo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

**Sr. Fernández (R.).** — Entiendo que el delito que se quiere inculpar es la lucha racial o religiosa y que el instigamiento a esa lucha es lo que se pretende castigar. En ese sentido el proyecto del Poder Ejecutivo es bien claro. Dice el inciso 2º del artículo 213 bis: «Los que públicamente instigaren a la discriminación, o lucha racial o religiosa, o de clases.» Esta última parte se suprimió y el despacho quedó redactado en la forma que se conoce.

La figura es la instigación a la lucha racial o religiosa, y la instigación es lo que se castiga, siempre que persiga promover ese delito.

El artículo 209 del Código Penal habla de la instigación a cometer delitos, diciendo «el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución...» Aquí lo que se castiga es, vuelvo a repetir, la instigación a cometer un delito, que ahora se establece en la ley, que es la lucha racial o religiosa.

Quizás fuera conveniente volver al texto primitivo, y así obviaríamos todas estas dificultades que se están señalando.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez para una segunda intervención de cinco minutos.

**Sr. Gutiérrez.** — Simplemente, para recoger las expresiones del señor diputado Fernández, en cuanto decía que quizás fuera conveniente volver al texto que propusiera el Poder Ejecutivo. En ese sentido hago moción de pasar a un breve cuarto intermedio para ver si podemos llegar a un tipo de solución.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar la moción del señor diputado Gutiérrez de pasar

a un breve cuarto intermedio a fin de aunar criterios.

— Resulta negativa de 65 votos. Votan 99 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Villanueva.

**Sr. Villanueva.** — Señor presidente: pese a que el problema que origina el debate que nos ocupa toca muy de cerca aspectos de derecho, y a la situación de que quien habla no es abogado, entiendo que las normas penales, por su misma trascendencia individual y social, deben imponer figuras delictivas absolutamente precisas y perfectamente bien delimitadas.

A ese respecto, entonces, pienso que la imprecisión o la ambigüedad de la terminología que se emplea en el despacho de la mayoría no es otra cosa que el resultado de la imprecisión de los conceptos que le dan origen.

Por este motivo propongo que la comisión se reúna nuevamente, como lo acaba de sugerir el señor diputado Gutiérrez, y que cuando lo haga para considerar los conceptos que queremos reafirmar e incorporar como normas positivas del Código Penal, se tome en cuenta, no la discriminación verbal, que traería apareada, como lo señaló el señor diputado Bilbao, una serie de contingencias peligrosas, sino los actos o hechos que importen una discriminación efectiva.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — Antes de reabrirse el debate hemos estado alrededor de un hora aunando criterios para redactar el despacho último que se leyó por Secretaría.

Evidentemente, si argumentamos que la expresión «tratamiento discriminatorio» no es suficientemente precisa, podemos, quizás, anular la intención que movió a la comisión y a esta Cámara a incluir este tema en la ley que estamos tratando.

**Sr. Fernández (R.).** — ¿Me permite, señor diputado?

**Sr. Patlis.** — Con mucho gusto.

**Sr. Fernández (R.).** — Cuando en el proyecto del Poder Ejecutivo se habla de discriminación, se debe entender que es a los efectos de provocar lucha social o religiosa. Lo que se inculpa es precisamente la discriminación para provocar la lucha social o religiosa, y ésta es la nueva figura.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — Efectivamente; las palabras del señor diputado Fernández son exactas.

El Poder Ejecutivo incluye la inculpación del delito de discriminación para provocar la lucha por razones raciales o religiosas. Pero entiendo que es intención de los que hemos estado discutiendo la redacción de este artículo ir más allá. En nuestro país hay enfrentamientos que

no los podemos negar ni los debemos ocultar, aunque no llegan a tener las características de luchas por motivos raciales o religiosos. La acción de minorías perturbadoras y pertinaces no puede ser considerada una lucha nacional por motivos de índole racial o religiosa, pero es una sistemática actividad y actitud de tratamiento discriminatorio que no podemos negar.

Desde el punto de vista de la discusión de los términos, en última instancia vamos a encontrar que ninguna palabra tiene en el idioma castellano una definición precisa y única; todas admiten varias acepciones. A este respecto, ante la crítica, atinada y fundamental, que el señor diputado González Bergez hizo a la expresión «tratamiento discriminatorio» y ante la duda que presentó en cuanto a si la disposición se aplicaría a aquellas actitudes públicas de determinados organismos, confesionales o no, que prohíban el acceso a sus instituciones a determinadas personas por motivos de índole racial o religiosa, yo, por mi parte, aclaro personalmente que las computo incursas en la incriminación que vamos a votar.

Tenemos para esto el ejemplo de la lucha que está llevando desde hace varios años el pueblo estadounidense para que en los establecimientos educacionales y en los locales públicos se admita a los negros. Este es un problema que aquí no existe, en gran magnitud, pero, en la escala en que puede existir, debemos buscar su superación. No podemos admitir que en un local público se le niegue la entrada a nadie por motivos raciales, religiosos, políticos o sociales.

Creo que en la elaboración de la unión política por la que debemos luchar en este momento, a fin de sellar la unión general de la familia argentina, no debemos detenernos ante estos tímidos avances de la legislación. Ya he utilizado esta misma expresión al referirme a las facultades del poder público de incautarse de determinadas mercancías. Ahora, también digo que éste es un avance tímido, pero con avances tímidos como éstos vamos a estructurar una nueva nación, para bien de todos.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

**Sr. Bravo (C. A.).** — Es evidente que los miembros que integramos la comisión hemos coincidido en la redacción de este inciso, tal como ha sido leído, pero no hemos coincidido en cuanto a la interpretación y el alcance que se está asignando a las palabras. Es decir, que hay discrepancias; y en esta situación, no obstante la reciente resolución de la Cámara de no hacer lugar al pedido de cuarto intermedio formulado por el representante del bloque de UDELPA, creo que debemos volver a reunirnos los integrantes de la comisión para producir un despacho preciso y con exactitud en sus términos.

En otras palabras, atento a las expresiones de los señores diputados Patlis y Schaposnik, propongo que la Honorable Cámara pase a un bre-

ve cuarto intermedio, de aproximadamente diez minutos, permaneciendo los señores legisladores en sus bancas.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Bravo.

—Resulta afirmativa de 70 votos; votan 99 señores diputados.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Invito a los señores diputados a pasar a cuarto intermedio por el término de diez minutos, permaneciendo en sus bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 40.

—A la hora 21 y 5:

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Continúa la sesión.

Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Jofré.

**Sr. Jofré.** — Señor presidente: es indudable que existe gran dificultad en la redacción del artículo que se ha propuesto. Los que hemos tenido oportunidad de conversar sobre este tema, hemos visto que hay varias sugerencias y la comisión no ha podido ponerse de acuerdo. Se trata de un problema de inusitada gravedad. Estamos creando nuevas figuras jurídicas, y si no somos muy precisos y exactos en la redacción, pueden ocasionarse inconvenientes muy graves cuando deba interpretarse esta norma que esta noche vamos a votar.

Por consiguiente, por la seriedad del trabajo que debemos realizar y por la celeridad con que debemos aprobar este proyecto, propongo que pasemos a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

**Sr. Lejarraga.** — Me voy a oponer a la moción de pasar a cuarto intermedio. Aprecio y comparto las consideraciones que ha formulado el señor diputado Jofré. Comprendo que ésta es una materia muy delicada en la que debemos andar con cuidado y no improvisar, y advierto también que la comisión no puede de momento superar las dificultades. Ya hemos tenido dos cuartos intermedios y no se ha encontrado la fórmula o la justa expresión, para, diríamos, tipificar un delito cuyo establecimiento, en principio, compartimos todos.

Por eso, pido que este artículo pase nuevamente a comisión, pero ello no impediría que siguiéramos tratando el resto del despacho, y que continuemos trabajando hasta las 22, acelerando el trabajo en lo posible, porque en lo que resta del despacho no tendremos dificultades y, si las tuviéramos, ya veríamos. Anoto además que los puntos a considerar en el resto

del despacho son de materia totalmente distinta del tema que consideramos.

Me opongo pues, a que se pase a cuarto intermedio, y hago indicación de que este artículo, que constituye una dificultad que de momento no podemos superar, pase nuevamente a comisión para un estudio todo lo detenido y profundo que sea necesario.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

**Sr. Serú García.** — Quiero referirme brevemente a la moción de orden del señor diputado Jofré. Entendemos que, no obstante las dificultades que han surgido con respecto al artículo en cuestión, debemos continuar sesionando y, en todo caso, prolongar este cuarto intermedio hasta que se llegue a la redacción definitiva. Se trata de que esta ley sea sancionada cuanto antes y no demorar su trámite, lo que por otra parte también habrá de perjudicar el tratamiento de otras cuestiones importantes que la Cámara tiene en carpeta.

Por ello, y aun a riesgo de tener que trabajar hasta altas horas de la madrugada, nuestro bloque se va a oponer a la moción de cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

**Sr. Gómez Machado.** — Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que dictar esta ley lo más rápidamente posible, pero tenemos que ajustar la técnica para cumplir con ese propósito. Pienso que el espectáculo que estamos dando en la Cámara, reuniendo la comisión así, en breves cuartos intermedios, no es el más edificante, ni el más eficaz, ni el más acelerado para dictar la ley lo más rápidamente posible.

Me parece que la mejor manera de que este proyecto sea terminado de tratar a más tardar mañana es que se reuna la comisión en el día de mañana y ajuste los términos de esta modificación y de otras que, seguramente, se van a proponer. Ese es el único mecanismo; lo otro va a significar que se prolongará este cuarto intermedio una o dos horas, y a las diez u once de la noche no vamos a tener número y tendremos que levantar la sesión.

**Sr. Serú García.** — Los ausentes serán responsables.

**Sr. Gómez Machado.** — No se trata de marcar responsabilidades, sino de que este proyecto se sancione lo más rápidamente posible, y me parece que para ello lo mejor es pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 14, para continuar tratándolo hasta terminar. Pero de ninguna manera la Cámara puede seguir con este procedimiento, que además de ineficaz y antiparlamentario, se caracteriza por su lentitud. Por eso apoyo la moción de pasar a cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Patlis.

**Sr. Patlis.** — Quisiera agregar a esta moción de cuarto intermedio y para información de la Cámara, que en la conversación realizada en el cuarto intermedio llevó a cabo recientemente se ha llegado a un acuerdo. Hay un texto aparentemente definitivo para este artículo; pero ha surgido en la inquietud de todos los diputados que hemos intervenido en su redacción la necesidad de forzarnos a un compás de espera para no improvisar ni correr el riesgo de sancionar apresuradamente un artículo cuya elaboración ha sido dificultosa y en el cual puede haberse deslizado algún error que la reflexión y el reestudio pudieran poner de manifiesto de aquí al día de mañana.

Pero, de cualquier modo, deseo destacar que es merced a esta coincidencia, a veces forzada, en la cual distintos sectores de la Cámara se aunaron para obtener una solución, que hemos podido votar hoy lo que se ha votado. Al principio de la sesión no existía la menor posibilidad de votar en general absolutamente nada de este proyecto, y ha sido el hecho de forzar la coincidencia y deponer intransigencias lo que ha logrado que todos los sectores votaran un despacho.

En base a este criterio consideramos importante que de ahora a las 15 de mañana no sólo se pueda meditar sobre el artículo que hemos redactado en tan difícil trámite, sino que busquemos la coincidencia en los demás artículos que faltan, para obtener mañana y en definitiva la sanción de este proyecto.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

**Sr. Fernández (R.).** — Las palabras pronunciadas por los señores diputados Patlis y Gómez Machado han sido suficientemente claras. Han dado las razones que impulsan a la Cámara y que la determinan a pasar a un cuarto intermedio, en la intención de que mañana en horas de la mañana debe reunirse la comisión para estudiar exhaustivamente este artículo y rever los que falta considerar. Así podremos en el día de mañana, aprobar el proyecto. Debe ser la intención de la Cámara, y éste es el sentido de mis palabras, que terminemos cuanto antes, en cualquier forma, con la sanción de este importante proyecto de ley.

Por las razones expuestas, este bloque va a apoyar la moción de orden formulada de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

**Sr. Vedia.** — Es evidente que en la consideración de temas, problemas o normas que habrán de ser incorporados a la legislación de fondo no puede obrarse con precipitación, e indudablemente sería obrar de tal manera, insertar ahora normas surgidas de un rápido intercambio de ideas efectuado hace unos momentos en el recinto. Estas son normas que deben ser madu-

radas y bien pesadas, tanto más cuanto que en este caso particular atañen a la libertad y a la seguridad personal.

Nuestro bloque estima que este artículo debe volver a comisión para ser objeto de un análisis meditado y sereno, pero que también es necesario que la Cámara continúe con la consideración de los demás artículos, porque es urgente la sanción de la ley, tanto para hacer efectiva la derogación de la legislación que queremos suprimir, como para abordar otros problemas también importantes y que se encuentran pendientes.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Fraga.

**Sr. Fraga.** — Las opiniones escuchadas en el recinto son unánimes en el sentido de reconocer lo delicado del tema que estamos tratando. Yo me permito hacer una pequeña modificación a la moción de orden del señor diputado Jofré, en el sentido de pasar a cuarto intermedio hasta mañana, pero que el artículo en cuestión pase a comisión previo a su tratamiento, a efectos de que en la sesión a realizar en el día de mañana la comisión haya pulido la redacción del dictamen sobre el mismo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez.

**Sr. Gómez Machado.** — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

**Sr. Gutiérrez.** — Sí, señor diputado.

**Sr. Gómez Machado.** — Deseo saber cuál es el procedimiento técnico que permitiría a la Cámara a remitir a comisión el artículo de un proyecto que está tratando y continuar considerando el resto del articulado. La Cámara no puede fraccionar el proyecto en tratamiento, remitiendo un artículo a comisión y continuando con el resto.

Vale decir, que la moción que se ha formulado no significa sino pasar a cuarto intermedio para que en el día de mañana se reúna la comisión y analice este artículo y otras modificaciones que se pueden hacer, y por la tarde la Honorable Cámara pueda continuar sesionando hasta terminar, con el debido asesoramiento de la comisión.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Reglamentariamente corresponde proceder a votar la moción de orden formulada.

**Sr. Gutiérrez.** — Estaba en el uso de la palabra.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia aclara que con el propósito de que se aunarán criterios ha permitido una breve discusión sobre la moción de orden formulada, que, reglamentariamente, debe votarse sin discusión.

**Sr. Gutiérrez.** — En ese caso me limito a expresar que nuestro bloque apoya la moción de orden del señor diputado Jofré.

**Sr. Pizarro.** — Antes de votarse la moción de orden, que se lea el artículo 140 del reglamento.

**Sr. Maldonado.** — Después de la discusión que se ha producido, debe concederse el uso de la palabra a los señores diputados que la han solicitado.

**Sr. Jofré.** — Deseo aclarar el sentido de mi moción.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Reglamentariamente no corresponde, señor diputado.

Por Secretaría se va dar lectura del artículo 140 del reglamento.

**Sr. Prosecretario (Pardo).** — «Artículo 140. — Un proyecto que después de sancionado en general o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.»

**Sr. Serú García.** — Por eso nos oponemos a que el asunto vuelva a comisión.

**Sr. Jofré.** — Pido la palabra para una aclaración. Seré brevísimo.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Si el señor diputado se va a referir a la moción de orden, la Presidencia le rogaría que desistiera de su propósito, porque debe someterse a votación una moción de orden y ha negado la palabra a otros señores diputados.

**Sr. Jofré.** — Desearía precisar el sentido de mi moción, para que no haya malos entendidos. Rogaría dos segundos para explicar con exactitud mi propósito.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — La Presidencia, en consecuencia, concederá la palabra al señor diputado Maldonado, a quien se la negó hace unos momentos.

**Sr. Jofré.** — Desisto de hacer uso de la palabra.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado Jofré, de que la Cámara pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.

—Resulta afirmativa.

**Sr. Serú García.** — Que conste nuestro voto en contra.

**Sr. Presidente (Mor Roig).** — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 23.